

Coh 2

20
PD

COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA ELECCION
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RECIBIDO
12 FEB 2020

RECIBE: Elma HORA: 8:52
+CD.

EXPEDIENTE 20.

SEÑORES DE LA COMISION DE POSTULACION PARA LA ELECCION DE
MAGISTRADOS DE CORTE DE SUPREMA DE JUSTICIA.

JAIME AMILCAR GONZALEZ DAVILA, de cincuenta y siete años de edad, casado, guatemalteco, abogado y notario, de este domicilio, señalo como lugar para recibir citaciones y notificaciones la oficina profesional situada en la tercera avenida nueve guion sesenta y nueve, segundo nivel, oficina dos guion ocho de la zona uno de esta ciudad capital, por este medio comparezco a EVACUAR LA AUDIENCIA que me fuera conferida por el SEÑALAMIENTO DE IMPEDIMENTO A MI POSTULACION PARA MAGISTRADO DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, que interpusiera en mi contra LA FUNDACION MYRNA MACK, para lo cual atentamente:

EXPONGO.

I.- El artículo 14, numeral 7) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: "... Nadie puede ser procesado o penado de nuevo por una infracción por la cual ya ha sido definitivamente absuelto o condenado de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país...". De lo anterior se estima que, para que sea dable aplicar el principio *non bis in idem*, es necesario que una persona ya haya sido procesada por un hecho, y que, como resultado, se haya emitido una decisión final que resuelva el asunto de controversia, evitando, con ello, un doble procesamiento por la misma causa, lo que imposibilita su persecución, de nueva cuenta, por el mismo suceso.

II.- La denunciante alega que no soy idóneo en relación a mi honorabilidad para ocupar el cargo de Magistrado, fundamentándose y sustentando el citado impedimento en el siguiente hecho, que literalmente dice: "I. Durante su actuación

Lic. Jaime Amilcar González Dávila
Magistrado Presidente
Sala Tercera de la Corte de Apelaciones
del Ramo Penal, Narcotráfico y Delitos Contra el Ambiente

0

como Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, el Magistrado González Dávila, admitió haber firmado una resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia en la que no participó. Por estos hechos se siguió un trámite en su contra en el sistema disciplinario del Organismo Judicial, en el cual se le endilgó posible negligencia en los deberes propios de su cargo. A dicho caso le corresponde el número de Expediente 789-2016 JDJ.” II.- Como quedó anotado en el numeral romano anterior, el referido argumento tiene como sustento que firmé una resolución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia en la que no participé y que por esos hechos se siguió un trámite en mi contra en el Sistema Disciplinario del Organismo Judicial, en la cual se me **endilgó posible negligencia en los deberes propios de mi cargo**. A dicha denuncia le corresponde el número de expediente 789-2016 JDJ.

III.- El artículo 26 de la ley de lo Contencioso Administrativo establece: Integración: En lo que fuere aplicable, el proceso contencioso administrativo se integrará con las normas de la Ley del Organismo Judicial y Código Procesal Civil y Mercantil; así también el artículo 126, ordena: Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. **Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión**; quien contradice la pretensión del adversario, ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impositivas de esa pretensión...” Al verificar el memorial contentivo del señalamiento de impedimento a la postulación de mi persona al cargo de Magistrado a la Corte Suprema de Justicia interpuesto por la FUNDACION MYRNA MACK, **se constata que en ningún apartado del mismo OFRECE O PROPONE MEDIOS DE PRUEBA CON LOS CUALES PRETENDA ACREDITAR LA PRETENSION DE**

Lic. Jaime Amílcar González Dávila
Magistrado Presidente
Sala Tercera de la Corte de Apelaciones
del Rama Penal, Homicidios y Delitos Contra el Ambiente

QUE MI PERSONA NO SEA CONSIDERADA DENTRO DE LA LISTA DE NOMBRES QUE SE REMITA AL CONGRESO DE LA REPUBLICA POR NO SER IDONEO PARA EL CARGO, por lo que dicha pretensión debe de ser rechazada in limine toda vez que no basta con decir o asegurar hechos que perjudiquen a una persona sin probar los mismos, porque se puede tener razón, pero si no se demuestra no se alcanzará procesalmente un resultado favorable, toda vez que es preciso una actividad probatoria para confirmar las afirmaciones de hecho realizadas por las partes aún en un proceso administrativo como el que nos ocupa toda vez que legalmente es necesario probar la verdad de un hecho controvertido del cual depende el derecho que pretendo de ser incluido en el listado de candidatos a Magistrado de Corte Suprema de Justicia que oportunamente será remitido por esta comisión al Congreso de la República de Guatemala. Como podrá verificar esta comisión la señora HELEN BEATRIZ MACK CHANG, NI SIQUIERA ACREDITA LA REPRESENTACION CON QUE ACTUA, toda vez que si bien es cierto acompaña una fotocopia simple de su nombramiento como Representante legal de la fundación antes nombrada, también lo es que el hecho de que el proceso administrativo sea regido por un principio anti formalista, también lo es que UN ACTO COMO EL DE PROBAR QUE EFECTIVAMENTE ES LA REPRESENTANTE LEGAL DE UNA INSTITUCION LEGALMENTE CONSTITUIDA DEBE PROBARLO, y si no posee el documento que acredite tal hecho por lo menos debe pedirlo a esta institución que lo requiera a donde corresponde. **EN CONCLUSION:** El señalamiento de impedimento a mi postulación como Magistrado a la Corte Suprema de Justicia DEBE DE SER RECHAZADO IN LIMINE POR NO ACOMPAÑAR MEDIO PROBATORIO ALGUNO CON EL CUAL PRETENDA ACREDITAR SU PRTENSION.

IV.- Aunque la Fundación Mack NO acredite el impedimento interpuesto en mi contra y en cumplimiento lo establecido en el artículo 126 de la ley antes civil nombrada, he de manifestar que lo aseverado por la mencionada fundación es totalmente falaz **toda vez que en ningún momento firmé RESOLUCION ALGUNA POR LA CUAL SE LE CAUSARA PERJUICIO TANTO A TERCERAS PERSONAS COMO A LA PROPIA ADMINISTRACION DE JUSTICIA**, ya que el documento que me fuera remitido a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que actualmente presido, **FUE UN PROYECTO DE RESOLUCION DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS**, es decir un documento que no había nacido a la vida jurídica ya que el mismo, no solamente, no estaba firmado o signado por la totalidad de los Magistrados que integraron el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que le dio origen al mencionado PROYECTO DE RESOLUCION, sino que tampoco estaba firmado por el propio SECRETARIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, es decir, nunca jamás se cometió falta alguna, sea de cualquier tipo de naturaleza, porque tal y como lo aseveré en el procedimiento disciplinario que al que oportunamente fui sometido y que dio origen a la formación del expediente número 789-2016 JDJ, para que una resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia naciera a la vida jurídica la misma debe de estar firmada por la totalidad de los Magistrados que conforman ese alto organismo del Estado y por el propio Secretario, tal y como lo ordena la Ley del Organismo Judicial en su artículo 143, que literalmente dice: **“Requisitos.** Toda resolución judicial llevará, necesariamente, el nombre del tribunal que la dicte, el lugar, la fecha, su contenido, la cita de leyes **y las firmas completas del juez, del magistrado o de los magistrados, en su caso, y el secretario, o sólo la de**

éste cuando esté legalmente autorizado para dictar providencias o decretos de puro trámite” (el resaltado es propio). Así también el artículo 108 de la mencionada ley establece: **Secretarios:** En cada uno de los tribunales habrá un secretario que autorice las resoluciones que se dicten y las diligencias que se practiquen; y además, el personal que requiera el servicio...” -----.

V.- El documento que oportunamente firmé y que es de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis y que le dio origen al proceso disciplinario antes mencionado, no es una resolución sino un proyecto de resolución que en ningún momento nació a la vida jurídica, por tanto NO se pudo tomar como un acto que constituya la comisión de una falta disciplinaria y por lo mismo jamás pudo ni siquiera generar duda de mi honorabilidad, no solamente en mi actuar como persona particular, sino en aquella en donde actúo como administrador de justicia, **además de que la citada resolución aparte de no nacer a la vida jurídica y por ende incapaz de surtir efectos legales que menoscabaran derechos y obligaciones de terceros, porque tal y como lo aseveré con anterioridad, lo que firmé fue un simple proyecto de resolución.**

VI.- Además quedó demostrado en el proceso disciplinario al que fui sometido como sujeto pasivo, que FUI INDUCIDO A ERROR PARA FIRMAR EL MENCIONADO PROYECTO POR PARTE DEL OFICIAL III DE LA VOCALIA IX DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, MARLON ANTONIO SANTOS FIGUEROA, quien fue la persona encargada de llevar y poner a disposición de mi persona el citado documento para que lo firmara, toda vez que debía, previo a llevar el documento para su firma, corroborar que persona o personas debían de firmar el citado documento para evitar precisamente inducir a error a los funcionarios que firmarían dicho documento, lo que fue debidamente informado

por la Licenciada Ana Patricia Lainfiesta Martínez, Supervisora Auxiliar de la Supervisión General de Tribunales, **EN EL INFORME QUE OPORTUNAMENTE PRESENTÓ, EL CUAL INDICA EN SUS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO LO SIGUIENTE: "c)... A lo anterior se suma la declaración del oficial de vocalía Marlon Antonio Santos Figueroa, que al ser entrevistado claramente establece que al no encontrar al Magistrado Gustavo Dubón por la urgencia del caso rápidamente acudió a la Sala Tercera del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, y procedió a integrar con el magistrado Presidente de dicha Sala Jaime González Dávila; o sea que dicho oficial indujo a error al Magistrado González Dávila..."**. De lo anterior se pudo establecer que mi actuar no fue negligente, pues debemos de entender a la negligencia como aquella omisión más o menos voluntaria pero consiente de poner la diligencia debida en los asuntos que se conocen y que tienen consecuencias jurídicas graves, lo que jamás ocurrió en mi caso, pues mi actuación fue producto de la negligencia del auxiliar judicial antes nombrado que me indujo a error y que nunca produjo alguna consecuencia jurídica pues en mi calidad de Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente, constantemente integraba los plenos de la Corte Suprema de Justicia y cuyas resoluciones no eran emitidas en ese momento, sino que se remitían días después a los despachos de los Magistrados que integraron dichos plenos para la firma respectiva, fue así como el día que firmé el citado documento, el mismo iba adjunto a todos los documentos pendientes de firma de plenos anteriores, razón por la cual tanto el proceso disciplinario iniciado en mi contra fue declarado sin lugar, así como la acción de Antejuicio que el Ministerio Público y la Comisión Internacional

Lic. Jaime Amílcar González Dávila
Magistrado Presidente
Sala Tercera de la Corte de Apelaciones
del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente

contra la Impunidad en Guatemala, presentaron en mi contra y por consiguiente **EN NINGUN MOMENTO FUI SANCIONADO POR EL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, COMO POR ORGANO JURISDICCIONAL ALGUNO**, ya que el citado documento únicamente era un proyecto de resolución y por lo mismo al no estar firmado por la totalidad de los Magistrados que integraron el pleno que le dio origen a dicho documento ni por el propio Secretario de la Corte Suprema de Justicia, **jamás se le causó daño a la Administración de Justicia, ni a terceros que pudieran tener interés en el asunto.**

VII.- Como lo asevere con anterioridad la denunciante no presentan medio de prueba alguno con el cual acredite su pretensión, mas sin embargo con la prueba documental que acompaño y que consiste en certificación de la resolución emitida por el Consejo de la Carrera Judicial dentro del expediente número 20-2017 de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete por medio de la cual declaró CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR MI PERSONA CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA JUNTA DE DISCIPLINA JUDICIAL EL SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE Y COMO CONSECUENCIA MODIFICÓ EL NUMERAL PRIMERO DE DICHA RESOLUCION, LA CUAL QUEDÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: "I. SIN LUGAR LA DENUNCIA PROMOVIDA EN CONTRA DEL ABOGADO JAIME AMILCAR GONZALEZ DAVILA, en su función de Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente, por las razones consideradas. III. SE REVOCAN los numerales IV y V de la resolución impugnada, por las razones consideradas...". **EN CONCLUSIÓN:** El hecho que le da origen al impedimento interpuesto en mi contra ya fue juzgado en más de una oportunidad, ya que si bien es cierto se dictó

por parte de la Junta de Disciplina Judicial resolución sancionatoria, la misma fue dejada sin efecto y sin validez legal alguna cuando el Consejo de la Carrera Judicial declaró con lugar el Recurso de Apelación que interpuso en contra de la resolución dictada por la citada Junta; Además tanto el Ministerio Público como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentaron en mi contra ante la Corte Suprema de Justicia con fundamento en el hecho que le dio origen a la denuncia administrativa antes relacionada, SOLICITUD DE ANTEJUICIO EN CONTRA DE MI PERSONA, **ACCION FUE RECHAZADA EN FORMA LIMINAR TAL Y COMO CONSTA EN LA RESOLUCION DE FECHA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS**, que acompaño al presente; por lo que en atención al Principio *non bis in idem*, al que hice referencia en el numeral romano I, de este memorial, LA DENUNCIA INTERPUESTA EN MI CONTRA NO SOLAMENTE DEBE SER RECHAZADA POR HABER SIDO JUZGADO EL HECHO EN QUE SE FUNDAMENTA LA MISMA EN MÁS DE UNA OPORTUNIDAD, sino también porque la entidad denunciante NI SIQUIERA ACREDITA LA REPRESENTACION CON QUE ACTÚA LA INTERPONENTE DEL SEÑALAMIENTO, ADEMÁS DE NO ACOPAÑAR MEDIO PROBATORIO ALGUNO CON EL CUAL PRETENDA ACREDITAR SU PRETENSION.

Por lo anteriormente expuesto propongo los siguientes medios de:

P R U E B A.

I.- Certificación emitida por la Coordinadora II del Archivo General de Tribunales de fecha veinticinco de octubre del año dos mil diecinueve que contiene la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia el veintiuno de noviembre del dos mil dieciséis, en la que resuelve **RECHAZAR IN LIMINE la solicitud de Antejudio presentada en mi contra tanto por el Ministerio Publico como por**

la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, que acompaño al presente.

II.- Certificación de fecha veintinueve de octubre del año dos mil diecinueve emitida por La Secretaria Ejecutiva A.I. del Consejo de la Carrera Judicial de la República de Guatemala, que contiene la resolución dictada dentro del expediente CCJ NO. 20-2017. Ref. 789-2016 JDJ, por medio de la cual se resolvió declarar sin lugar la denuncia promovida en mi contra en mi función de Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que acompaño al presente.

III.- Presunciones legales y humanas.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Artículo 20 de la Ley de Comisiones de Postulación, el cual establece "...Las Comisiones verificarán la información que recaben, excluyendo la que no pueda ser confirmada, y notificarán al día siguiente al profesional, quien deberá ser escuchado dentro de un plazo de cinco días, con el objeto que presente sus pruebas de descargo si las tuviere."

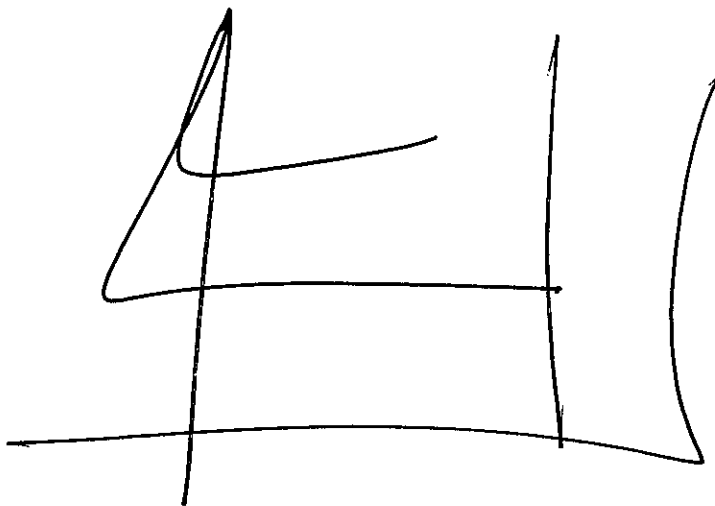
P E T I C I O N .

- 1.- Que se admita para su trámite el presente memorial y se agregue a sus antecedentes.
- 2.- Que en la forma expuesta se tenga por evacuada la audiencia conferida.
- 3.- Que se tengan por presentados los medios probatorios que se acompañan al presente memorial.
- 4.- Que al dictar la resolución que en derecho corresponde se RECHACE EN FORMA LIMINAR EL SEÑALAMIENTO INTERPUESTO EN MI CONTRA POR LA FUNDACION MYRNA MACK, POR HABER SIDO JUZGADO EN MAS DE UNA

OCASIÓN POR EL MISMO HECHO DENUNCIADO; o de lo contrario por no acreditar la entidad denunciante los hechos en que fundamenta su denuncia, o bien declarar sin lugar la denuncia interpuesta por la fundación antes mencionada y consecuentemente SE CONSIDERE A MI PERSONA COMO UNA PERSONA CON HONORABILIDAD, CAPACIDAD E IDONEIDAD, para ser incluido en el listado de candidatos que si cumplen con los requisitos para poder ser electo como MAGISTRADO DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Acompaño original y copia del presente memorial y documentos adjuntos, así también acompaño formato digital (PDF).

En la Ciudad de Guatemala, el 12 de Febrero del año 2020.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

Lic. Jaime Amílcar González Dávila
Magistrado Presidente
Sala Tercera de la Corte de Apelaciones
del Ramo Penal, Narcactividad y Delitos Contra el Ambiente



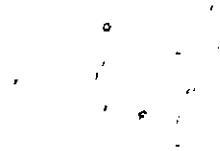
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Guatemala, veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis. -----

I) Se integra con los Magistrados suscritos. II) Se tienen a la vista para resolver las diligencias de antejuicio promovidas por el **MINISTERIO PÚBLICO** a través del Agente Fiscal abogado **FÉLIX ENRIQUE ARIAS FLORES** y la **COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA**, a través de su mandataria judicial con representación abogada **ASTRID ODETE ESCOBEDO BARRONDO**, contra el abogado **JAIME AMÍLCAR GONZÁLEZ DÁVILA**, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE.

ANTECEDENTES

Señalan los denunciantes que con fecha diez de octubre del presente año, el Ministerio Público conoció de la denuncia interpuesta por **MARÍA EUGENIA MORALES ACEÑA**, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia en la cual hace referencia a los siguientes hechos: el cinco de octubre de dos mil dieciséis se realizó la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Sesiones, ubicada en el tercer nivel del Palacio de Justicia. En el punto tres, durante la sesión los magistrados integrantes de la Cámara de Amparo y Antejuicios Nester Mauricio Vásquez Pimentel, Silvia Patricia Valdés Quezada y Vitalina Orellana y Orellana, sometieron a conocimiento del pleno diferentes expedientes de amparos y antejuicios. Dentro de los antejuicios, el entonces Presidente de la referida Cámara, presentó el antejuicio identificado con el número doscientos cincuenta y cinco guion dos mil dieciséis, promovido por el Ministerio Público a través de la agente fiscal Flor de María Samayoa Quiñónez, contra los diputados al Congreso

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

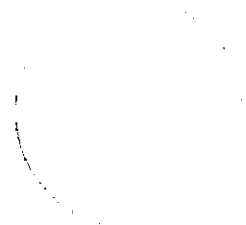




de la República de Guatemala ARISTIDES BALDOMERO CRESPO VILLEGAS, CHRISTIAN JAQUES BOUSSINOT NUILA, LUIS ARMANDO RABBÉ TEJADA, MANUEL MARCELINO GARCÍA CHUTÁ, CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GIRÓN y CÉSAR EMILIO FAJARDO MORALES, por hechos derivados de una denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas.

Al hacer referencia al antejuicio, la Magistrada Silvia Verónica García Molina se inhibió de conocer, por lo que se convocó a integrar al Magistrado de Sala de Apelaciones Gustavo Adolfo Dubón Gálvez y al Magistrado Freedyn Waldemar Fernández Ortiz que integró el pleno por ausencia del magistrado José Antonio Pineda Barales.

Expuso la Magistrada Morales Aceña que el Magistrado Nester Mauricio Vásquez Pimentel, se comprometió a recoger las firmas personalmente para evitar fuga de información y en virtud de los votos disidentes que era necesario razonar. Manifiesta la referida Magistrada que el diez de octubre de dos mil dieciséis le fue entregado en su despacho por su asistente, la resolución original señalada anteriormente, para efectos de proceder a firmar, pero al revisar el documento Original se percató que aparece la firma del Magistrado Jaime Amilcar González Dávila, Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, quien no fue convocado, no se presentó y en ningún momento integró la Corte, no estudió el caso, no emitió su voto ante el Pleno de Magistrados, ni ante el Secretario de la Corte Suprema de Justicia, por lo que considera que existe una falsedad, razón por la cual, en cumplimiento de su función como servidora pública y ciudadana guatemalteca formuló la denuncia e hizo entrega a la fiscalía del Ministerio Público, de una carpeta color verde con la impresión en letras doradas donde se lee: "Corte





Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio. MSC Néstor Mauricio Vásquez Pimentel Magistrado Vocal XI", en cuyo interior se encuentra la resolución original que fue puesta a disposición para firma (de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis), dentro de las diligencias de antejuicio identificadas con el número doscientos cincuenta y cinco guion dos mil dieciséis que constan de cinco páginas, contenidas en tres folios. Indican las entidades denunciantes que en virtud de "haber plasmado su firma en la aludida, afirmó, dio firmeza y seguridad de algo, de lo que él no conoció, por lo que las mismas se constituyen falsas" (sic).

CONSIDERANDO I

El procedimiento de antejuicio es una garantía que preserva las funciones de la administración estatal, impidiendo que los funcionarios sean imputados por razones ilegítimas, políticas o espurias. La Corte de Constitucionalidad ha sostenido el criterio que previo a determinar la admisibilidad a trámite de un antejuicio, corresponde a la Corte Suprema de Justicia analizar si la denuncia reúne los requisitos básicos de admisibilidad, siendo estos: a) que el Ministerio Público o persona denunciante proporcionen, elementos de razonabilidad suficientes sustentados en una investigación seria y previa realizada; b) que al interponente de la denuncia o querella le consten directamente los hechos, salvo el caso de antejuicios directamente presentados por el Ministerio Público; y, c) que la denuncia o querella no se promueva por razones espurias, políticas o ilegítimas. (Expediente dos mil cuarenta guion dos mil tres (2040-2003), sentencia de fecha veinticinco de marzo de dos mil cuatro, expediente dos mil cuarenta y dos guion dos mil tres (2042-2003), sentencia de fecha tres de mayo de dos mil cuatro, expediente dos mil cuarenta y tres guion dos mil tres (2043-2003), sentencia de fecha veintidós de diciembre de dos mil tres, expediente seiscientos treinta y

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

10

10

10

10

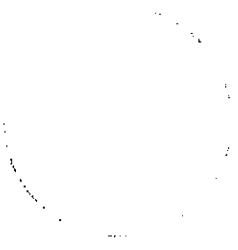


cuatro guion dos mil cinco (634-2005), sentencia de fecha ocho de agosto del año dos mil cinco y expediente dos mil ciento diez guion dos mil seis (2110-2006), sentencia del uno de marzo del año dos mil siete).

CONSIDERANDO II

Del análisis del expediente de antejuicio, se advierte que el punto medular de la denuncia es el hecho que la resolución de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, dictada por la Corte Suprema de Justicia dentro de las diligencias de antejuicio número doscientos cincuenta y cinco guion dos mil dieciséis, fue firmada por el magistrado denunciado, quien, según indican los denunciantes no conoció de dicho expediente, no integró Corte ese día y tampoco estuvo presente en la sesión plenaria correspondiente. Al respecto, esta Corte determina que la resolución indicada aún no estaba totalmente firmada porque faltaban las firmas de la Magistrada Vocal Décimo Segundo María Eugenia Morales Aceña y del Secretario de la Corte Suprema de Justicia Rony Eulalio López Contreras, consecuentemente la misma no nació a la vida jurídica, no era una resolución perfecta, siendo que para que tuviera validez debió ser firmada por la totalidad de los magistrados y autorizada por el Secretario de conformidad con el artículo 143 de la Ley del Organismo Judicial, que establece: *"Toda resolución judicial llevará, necesariamente, el nombre del tribunal que la dicte, el lugar, la fecha, su contenido, la cita de leyes y las firmas completas del juez, del magistrado o de los magistrados, en su caso y del secretario (...)"*, en el mismo sentido, el artículo 108 del citado cuerpo legal estipula: *"En cada uno de los Tribunales de justicia habrá un secretario que autorice las resoluciones que se dicten y las diligencias que se practiquen (...)"*.

Siendo que la resolución del cinco de octubre de dos mil dieciséis, tampoco fue notificada, por lo tanto no causó efectos ni consecuencias jurídicas a las partes, de





manera que no se puede establecer la existencia de indicios racionales que orienten a pensar que la actitud del funcionario denunciado, podría revestir características propias de ilícitos penales.

Dentro del anterior contexto, es oportuno traer a cuenta que para admitir a trámite un antejuicio deben existir, suficientes indicios que sustenten la posibilidad de que el denunciado pudo incurrir en actos que probablemente revisten las características de uno o varios ilícitos. Ante la inexistencia de esos indicios, esta Corte concluye que la denuncia fue presentada por motivos espurios e ilegítimos, lo que trae como consecuencia su rechazo *in limine*.

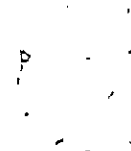
LEYES APLICABLES

Artículos citados y: 1, 2, 12, 175, 203, 204 y 214 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 3, 7, 9, 10, 11, 11 Bis y 20 del Código Procesal Penal; 1, 3, 4, 12, y 14 de la Ley en Materia de Antejuicio; 16, 23, 51, 75, 77, 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial.


POR TANTO


La Corte Suprema de Justicia, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver declara: I) **Rechazar *in limine*** la solicitud de antejuicio promovida por el **MINISTERIO PÚBLICO** a través de su Agente Fiscal abogado **FÉLIX ENRIQUE ARIAS FLORES** y la **COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA**, a través de su mandataria judicial con representación abogada **ASTRID ODETE ESCOBEDO BARRONDO** contra el abogado **JAIME AMÍLCAR GONZÁLEZ DÁVILA**, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE. II) Notifíquese.

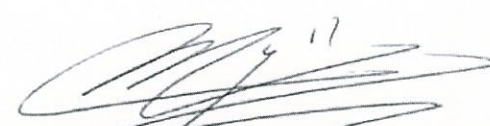
PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA




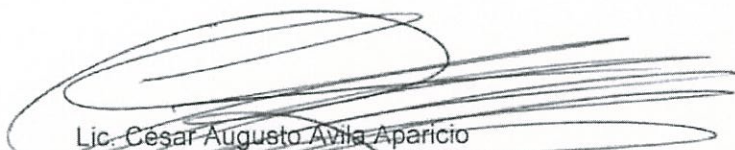




Dr. José Antonio Pineda Barales
Magistrado Presidente del Organismo Judicial y
de la Corte Suprema de Justicia (en funciones)

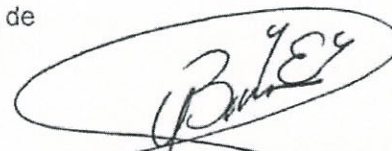

Lic. Ronald Manuel Colindres Roca
Magistrado Presidente
Sala Primera de la Corte de Apelaciones
del Ramo Civil y Mercantil



Licda. María de la Luz Gómez Mejía
Magistrada Presidenta
Sala Tercera de la Corte de Apelaciones
Ramo Civil y Mercantil

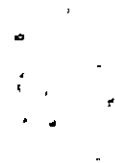

Lic. Néctor Guilebaldo de León Ramírez
Magistrado Presidente
Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del
Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente


Lic. César Augusto Avila Aparicio
Magistrado Presidente
Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Chiquimula


Lic. Noé Adalberto Ventura Loyo
Magistrado Presidente
Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, de
Delitos de Femicidio y Otras formas de Violencia
contra la Mujer y Violencia Sexual


Lic. Urias Eliazar Bautista Orozco
Magistrado Presidente
Sala Regional Mixta de la Corte de
Apelaciones de Jalapa


Licda. Greta Antilvia Monzón Espinoza
Magistrada Presidenta
Sala Regional Mixta de la Corte de
Apelaciones de la Antigua Guatemala





Licda. Flor de María Gálvez Barrios
Magistrada Presidente de la Sala Primera de la
Corte de Apelaciones de Familia

Lic. César Augusto López López,
Magistrado Presidente de la Sala Quinta de la
Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social

Lic. Domingo Ulban Fajardo
Magistrado Presidente
Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Lic. Guillermo Demetrio España Mérida
Magistrado Presidente
Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
GUATEMALA, C.A.

Licda. Juana Solís Rosales
Magistrada Presidente
Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Licda. Cecilia Odette Mesencio Arriaza de Salazar
Secretaria de la Corte Suprema de Justicia (en funciones)

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

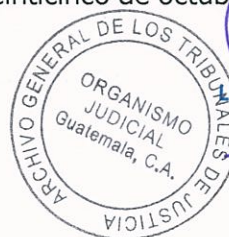


GUATEMALA, C.A.

**LA INFRASCRITA COORDINADORA II DEL ARCHIVO GENERAL DE
TRIBUNALES**-----

-----**CERTIFICA:** -----

Que tuvo a la vista el **ANTEJUICIO** identificado con el número **CUATROCIENTOS GUION
DOS MIL DIECISEIS** de la **CAMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA**. En el cual figuran como interponente: **MINISTERIO PUBLICO
y COMISION INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA** en contra
de: **MAGISTRADO PRESIDENTE JAIME AMILCAR GONZALEZ DAVILA DE LA SALA
TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL, NARCOACTIVIDAD
Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE**. Que las fotocopias que anteceden fueron
reproducidas de su original el día de hoy en mí presencia, las cuales contienen: **I).**
Reproducción de los folios setenta y cinco (75) al setenta y ocho (78) del expediente arriba
identificado. Y para los usos legales que al Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la
Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente: **JAIME
AMILCAR GONZALEZ DAVILA** convengan, extendiendo, numero, sello y firmo la presente
certificación, compulsada en **SIETE** hojas de papel especial para fotocopias únicamente en
su lado anverso, más la presente hojas oficio de papel bond, la cual tiene impreso el
membrete del Organismo Judicial. Guatemala, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve.-



LICDA. CARMEN LUCIA NAJARRO RUANO
COORDINADORA II
ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES



GUATEMALA, C.A.

**NÚMERO 400-2016 - CAMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA.**-----

ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES. Guatemala, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. **I).** Se admite para su trámite la solicitud que antecede y documento adjunto, agréguese a sus antecedentes. **II).** Resolviendo en definitiva a costa del interesado y con las formalidades de ley, extiéndase la certificación solicitada del proceso arriba identificado. Artículos: 14, 28, 29, 30 y 31 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 141, 142, 143 y del 171 al 177 de la Ley del Organismo Judicial




LICDA. CARMEN LUCÍA NAJARRO RUANO
COORDINADORA II
ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES

En esta fecha recibí conforme la resolución que antecede y la certificación solicitada.-----

Guatemala, _____ de _____ de 2019. HORA: _____

FIRMA: _____ NOMBRE: _____

DPI: _____ EXTENDIDA EN: _____

Consejo de la Carrera Judicial

LA INFRASCRITA SECRETARIA EJECUTIVA A.I. DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.-----


Certifica:

Que las ocho hojas de papel fotocopia que anteceden, las primeras siete impresas en su anverso y reverso y la octava únicamente en su lado anverso que reproducen fielmente la resolución fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, correspondiente al expediente CCJ - veinte guión dos mil diecisiete del Consejo de la Carrera Judicial, referencia JDJ setecientos ochenta y nueve guión dos mil dieciséis de la Junta de Disciplina Judicial, (CCJ-20-2017 ref. 789-2016 JDJ), apelación promovido por el abogado Jaime Amilcar González Dávila, Magistrado Presidente de Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala.-----

Y para entregar al abogado Jaime Amilcar González Dávila, extendiendo, numero, sello y firma la presente, en nueve hojas, las primeras ocho hojas de fotocopia y la presente hoja de papel simple con membrete del Consejo de la Carrera Judicial; en la ciudad de Guatemala, el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve.-----


Licda. Evelyn Jeannette Hernández Castillo
Secretaria Ejecutiva a.i. del Consejo de la Carrera Judicial



Elaborado por: Arturo Cusca 

Revisado por: Luis Figueroa 



GUATEMALA, C.A.



20-2017
1 de 8

Consejo de la Carrera Judicial

EXPEDIENTE 20-2017. CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL. Guatemala, veintinueve de mayo de dos mil diecisiete.-----

I. Con base en la Opinión Consultiva de la Corte de Constitucionalidad de fecha nueve de enero de dos mil diecisiete, emitida dentro del expediente cinco mil novecientos once guion dos mil dieciséis (5911-2016) y el artículo 74 del Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Carrera Judicial, se procede a dictar la presente resolución. II. En apelación y con sus antecedentes se examina la resolución emitida por la Junta de Disciplina Judicial de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, contenida en folios del seiscientos setenta y uno al seiscientos ochenta y siete del expediente disciplinario número setecientos ochenta y nueve guion dos mil dieciséis (789-2016), que en su parte conducente literalmente indica: "POR TANTO: Esta JUNTA DE DISCIPLINA JUDICIAL, con fundamento en lo considerado y leyes citadas, al resolver por unanimidad, **DECLARA:** I) **CON LUGAR** la denuncia promovida en contra del abogado JAIME AMILCAR GONZÁLEZ DÁVILA, en su calidad de Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, como consecuencia por una falta leve estipulada en el artículo 39 literal d) de la Ley de la Carrera Judicial, se le impone de conformidad con el artículo 42 de la misma ley literal "a", la sanción de una AMONESTACIÓN ESCRITA. II) **SIN LUGAR** la denuncia promovida en contra de la abogada MARIA EUGENCIA MORALES ACEÑA DE SIERRA, en su calidad de Magistrada Vocal Decimo Segunda de la Corte Suprema de Justicia. III) **EXHORTAR** al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que con auxilio de la Unidad Administrativa que consideren pertinente establezcan reglas claras y precisas a efecto de unificar el trabajo administrativo que cada uno de los Magistrados realiza en sus propias Cámaras y que es integrado al Pleno, a efecto de evitar retrasos y descuidos, en perjuicio de la seguridad jurídica y dar cumplimiento a lo prescrito en la Ley del Organismo Judicial y

Reglamento General de Tribunales. IV) Al quedar firme el presente fallo, el mismo debe ser ejecutado. V) En su oportunidad procesal, certifíquese al Consejo de la Carrera Judicial, para que haga efectiva la anotación respectiva y oportunamente archívense las actuaciones; VI) notifíquese." -----

ANTECEDENTES:

DEL HECHO QUE ATRIBUYE LA SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES:

"Porque usted abogado Jaime Amílcar Gózaes Dávila, en su calidad de Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramos Penal, narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, incurrió en negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo, al suscribir la resolución de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, dictada dentro de las diligencias de antejuicio número doscientos cincuenta y cinco guión dos mil dieciséis (255-2016) ya que no tuvo participación en el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en la deliberación y aprobación de dicha resolución por lo que incurrió en la falta leve prevista en el artículo 39 literal d) de la ley de la Carrera Judicial. II) "A) "Porque usted abogada María Eugenia Morales Aceña de Sierra, en su calidad de Magistrada Vocal Décimo Segunda de la Corte Suprema de Justicia incurrió en atraso y descuido injustificado en el trámite y resolución final de las diligencias de antejuicio número doscientos cincuenta y cinco guión dos mil dieciséis, ya que el día diez de octubre de dos mil dieciséis, le fue entregado dicho expediente para que suscribiera la resolución final de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, pero en lugar de suscribirla la remitió a la Fiscalía contra la Impunidad del Ministerio Público, por lo que se hizo necesario pedir su devolución y fue hasta el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, conociera nuevamente dicha resolución y le diera validez. Por lo que su conducta encuadra en la falta grave prevista en el artículo 40 literal b) de la Ley de la Carrera Judicial, Decreto 41-99 del Congreso de la República; B) Porque usted Abogada María Eugenia Morales Aceña de Sierra en su calidad de Magistrada Vocal Décimo Segunda de la Corte



20-2017
2 de 8

Consejo de la Carrera Judicial

Suprema de Justicia incurrió en negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo, ya que desde el diez de octubre de dos mil dieciséis, sustrajo del expediente de diligencias de Antejuicio número doscientos cincuenta y cinco guión dos mil dieciséis, el original de la resolución de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis y lo remitió a la Fiscalía Contra la Impunidad del Ministerio Público, inobservando lo estipulado en el artículo 171 de la Ley del Organismo Judicial. Por lo que su conducta encuadra en la falta leve prevista en el artículo 39 literal d) de la Ley de la Carrera Judicial, Decreto 41-99 del Congreso de la República" -----

CONSIDERANDO I

DE LA PROCEDENCIA DEL ANÁLISIS DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO. De conformidad con el artículo 51 del decreto 41-99 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Carrera Judicial, contra las resoluciones de la Junta de Disciplina Judicial, se podrá interponer recurso de apelación ante el Consejo de la Carrera Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación; en el presente caso el recurso de apelación fue presentado en tiempo; así mismo, se establece que la resolución impugnada es de carácter definitivo, pues pone fin al proceso disciplinario, por lo que se cumple con lo establecido en el artículo 19 literal n) del Reglamento General de la Ley de la Carrera Judicial (Decreto 41-99), y de conformidad con el artículo 74 del Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Carrera Judicial, es procedente efectuar su análisis legal.-----

CONSIDERANDO II

DE LO EXPUESTO POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCESO DISCIPLINARIO.-----

LA SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES, AL EVACUAR LA AUDIENCIA CONFERIDA MANIFESTÓ: "La razón de esta gestión es EVACUAR LA AUDIENCIA que

se confiere a la Supervisión General de Tribunales, con relación al recurso de apelación que se interpusiera en contra de la resolución de fecha 06 de marzo de 2017, proferida por la Junta de Disciplina Judicial dentro del expediente administrativo disciplinario número 789-2016 JDJ, para lo cual REITERO los conceptos vertidos en memorial de fecha 17 de marzo de 2017, pues como se indicó en el mismo, mi representada difiere de lo resuelto con relación a la Magistrada Morales Aceña de Sierra, porque en la parte considerativa del fallo literalmente se expresa que: Quedó acreditado que en su calidad de Magistrada Vocal Décimo Segunda de la Corte Suprema de Justicia le fue entregada el día diez de octubre de dos mil dieciséis, para que suscribiera, la resolución final de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente a las diligencias de antejuicio número doscientos cincuenta y cinco guión dos mil dieciséis, pero contrario a suscribirla la remitió a la Fiscalía Contra la Impunidad del Ministerio Público en esa misma fecha, para fundamentar la denuncia presentada en virtud que fue suscrita por el Abogado Jaime Amílcar González Dávila, Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, quien no participó en la discusión y aprobación de la misma. Tal razonamiento era suficiente para declarar con lugar la denuncia, toda vez que la Propia Junta de Disciplina Judicial consideró que el hecho imputado quedó debidamente probado. Sin embargo, en forma contradictoria y sin fundamento legal valedero declara sin lugar la denuncia formulada en contra de la funcionaria judicial denunciada, expresando que: "...lo anteriormente acreditado de conformidad con las pruebas ya valoradas no se considera por parte de los integrantes de esta Junta de Disciplina Judicial, que revista características de una o varias faltas administrativas ...", porque en atención a lo dispuesto por el artículo 298 del Código Procesal Penal, "... existe una obligación inexcusable de forma genérica para los empleados y funcionarios públicos de denunciar ante las autoridades señaladas en el artículo anterior el conocimiento que tengan de la comisión de un hecho que podría ser calificado como delito,



20-2017
3 de 8

GUATEMALA, C.A.

Consejo de la Carrera Judicial

incluso dicha omisión se encuentra tipificada como delito omisión de denuncia, el cual se desarrolla en el artículo 457 del Código Penal ... ". Con relación a ello, esta Supervisión estima procedente que la funcionaria judicial denunciada haya hecho del conocimiento del Ministerio Público el hecho en que incurrió el señor Magistrado, pero no en la forma como lo hizo, pues lo procedente hubiese sido acompañar como evidencia a la denuncia, una fotocopia simple o una certificación del documento original que contenía la resolución final de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente a las diligencias de antejuicio número doscientos cincuenta y cinco guión dos mil dieciséis, pero no sustraer del expediente el original de la resolución y remitirlo a la Fiscalía contra la Impunidad del Ministerio Público, pues con ello contravino lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley del Organismo Judicial, que establece que los expedientes de las actuaciones que practiquen los tribunales no deben salir de la oficina, pudiendo darse a quienes lo soliciten, fotocopias simples o certificaciones, exceptuando de esta regla únicamente los procesos fenecidos que, con fines docentes soliciten las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, excepción que no se da en el caso que nos ocupa. Con base en lo anterior se evidencia la procedencia del recurso de apelación interpuesto únicamente en contra de lo resulto en el numeral II) de la resolución final que se impugnó, que declara sin lugar la denuncia promovida en contra de la Abogada María Eugenia Morales Aceña de Sierra, en su calidad de Magistrada Vocal Décimo Segunda de la Corte Suprema de Justicia."-----

LA PARTE DENUNCIADA, ABOGADO JAIME AMILCAR GONZÁLEZ DAVILA, AL EVACUAR LA AUDIENCIA CONFERIDA MANIFESTÓ: "La Junta de Disciplina Judicial, para sostener la decisión ahora impugnada, se fundamenta en la declaración del testigo Marlon Antonio Santos Figueroa y en la resolución de la Corte Suprema de Justicia que repone la resolución que fue firmada, entre otros, por mi persona, porque la misma fue enviada en original al Ministerio Público; asimismo, con el expediente de antejuicio que

F. del

→

Q

[Signature]

incluye la resolución que contiene mi firma en donde se dice no participé en el pleno de la Corte. Lo anteriormente descrito, señores del Consejo, pone en evidencia que la Junta para resolver el presente caso no observó la recta y correcta aplicación de la sana crítica razonada al momento de valorar la prueba; en efecto, en relación a la prueba que dice la Junta que sirvió de base para sancionarme, he de señalar que la misma bajo ninguna circunstancia demuestra la comisión de la falta señalada, toda vez que la declaración prestada por el testigo pone de manifiesto que él únicamente estaba recolectando firmas para lo que sería una resolución y al momento en que se hizo la denuncia y se repusieron actuaciones, la misma jamás había nacido a la vida jurídica ni había causado efectos negativos contra ninguna persona o a la administración de justicia, razón por la cual, jamás podía sancionármese, evidenciándose únicamente los yerros en que la propia Corte Suprema de Justicia incurre en la tramitación de sus asuntos, por lo que esa declaración jamás podía utilizarse en mi perjuicio, dados los efectos que jamás produjo el proyecto de resolución que se firmó. El expediente de antejuicio donde aparece mi firma, tampoco podía valorarse en mi perjuicio, toda vez que, como ya se dijo, la resolución o proyecto de resolución, jamás nació a la vida jurídica, quedándose ello, simplemente en nada, porque esa resolución además, se repuso por otra que fue la que finalmente produjo sus efectos legales correspondientes y, fuera de ello, no existe otro medio de prueba que la Junta haya tenido para resolver como lo hizo, por tanto, no existe medio de prueba que demuestre la comisión de la falta por la que se me sancionó. La Junta de Disciplina Judicial, para resolver, obvió que conforme los artículos 214 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 75 de la Ley del Organismo Judicial, la Corte Suprema de Justicia se integra por trece magistrados y que una resolución para que surta todos sus efectos, debe conforme los artículos 108 y 143 de la Ley del Organismo Judicial, estar firmada por la totalidad de los magistrados y del secretario; en el caso concreto, lo que la Junta llama resolución firmada por mi persona (y que para mí es un proyecto de resolución), jamás fue firmada por la



GUATEMALA, C.A.



Consejo de la Carrera Judicial

totalidad de los magistrados, como tampoco por el Secretario de la Corte, razón por la cual, jamás nació a la vida jurídica y, por ende, no podía ocasionar ningún daño a persona alguna o a la administración de justicia que son precisamente los efectos que se requieren, conforme el último párrafo del artículo 35 del Reglamento General de la Ley de la Carrera Judicial Decreto 41-99 del Congreso de la República de Guatemala, para sancionarme, lo cual, no sólo no fue ni siquiera mencionado, menos demostrado por los medios legales correspondientes, es más, existe como prueba dentro del procedimiento disciplinario la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que claramente decidió no admitir a trámite un antejuicio promovido en mi contra derivado de los mismos hechos ahora analizados, precisamente, porque eso que se llama resolución, jamás fue firmada por todos los ya mencionados y porque nunca tuvo vida jurídica, de manera que para lo penal no existe ilícito y para lo administrativo si existe responsabilidad disciplinaria, no obstante que para ambos casos, la resolución que para mí es un proyecto, jamás nació a la vida jurídica y, con ello, se advierte inseguridad jurídica. Otro aspecto relevante no analizado dentro de la sana crítica razonada por la Junta, lo es que en eso que se llama resolución firmada por mi persona aparecen varias firmas ilegibles sin sellos de magistrados y se desconoce de quienes podrían ser esas firmas y sobre las que junto con la que aparece de mi persona no existe peritaje que demuestre que las anteriores firmas eran de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de Salas de Corte de Apelaciones u otros Tribunales de igual categoría que hubiesen firmado y, ello, lo que pone en evidencia es que la Junta de Disciplina Judicial por no aplicar correctamente la sana crítica razonada, obvió también, evaluar el contexto en que se produjo al firma de ese proyecto resolución, lo cual, era esencial, pues ese es el objeto de aplicar esa valoración para no caer en arbitrariedad en la decisión que se adopte que es precisamente lo que sucedió en el presente caso. Finalmente, se no se aprecia en la resolución ahora impugnada, ese claro razonamiento sobre los puntos vertidos y expuestos

precedentemente que, además, fueron invocados dentro las etapas procedimentales de la audiencia señalada oportunamente, careciendo de esa ausencia de razonamiento, que limita e impide mi legítimo derecho de defensa y a la tutela efectiva, ello, amerita que mi apelación sea declarada con lugar, en consecuencia se revoque la decisión asumida, se declare sin lugar la denuncia y se ordene el archivo de las actuaciones."-----

LA OTRA PARTE DENUNCIADA, ABOGADA MARÍA EUGENIA MORALES ACEÑA,
AL EVACUAR LA AUDIENCIA CONFERIDA MANIFESTÓ: "La honorable Junta de Disciplina Judicial dictó resolución con fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, la cual en su numeral romano II) declaró sin lugar la denuncia promovida en mi contra; sin embargo, la Supervisión General de Tribunales por medio de la Supervisora de Tribunales Irma del Rosario Castro Juárez, presentó recurso de apelación en contra de dicha resolución en su numeral antes descrito, aceptando de manera tácita el resto del contenido de la resolución y aceptando asimismo que en ningún momento existió negligencia en mi actuar. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE TORNAN INVIABLE LOS ARGUMENTOS DE APELACIÓN PRESENTADOS POR LA SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES Y QUE POSIBILITAN SE CONFIRME LA RESOLUCIÓN QUE SEIMPUGNA DICTADA A MI FAVOR. En cuanto a lo argumentado por la Supervisión General de Tribunales, me permito indicar que, tal como lo indiqué en la audiencia oral y pública que se celebró el día veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, es importante indicar que, la promoción de una denuncia es obligatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 298 del Código Procesal Penal, por lo que, era mi deber acompañarle los elementos de prueba en los que apoyé la misma, tal como lo establece el artículo 299 de esa ley procesal penal, razón por la cual, no se produjo retraso injustificado alguno que se me pretendiera endilgar, debido a que, la remisión de la citada resolución al ente investigador, deriva de la obligación legal antes indicada, ello para demostrar con base en la denuncia que oportunamente presenté, que se produjo un ilícito en una resolución o documento público de esa naturaleza,



GUATEMALA, C.A.



Consejo de la Carrera Judicial

específicamente, por haberla firmado un magistrado suplente, quien nunca integró el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para analizar y resolver en cuanto a esas diligencias de antejuicio específicas y que se individualizó en autos. De ahí que, desde ninguna perspectiva legal, el hecho que una resolución esté en poder del Ministerio Público, derivado de una denuncia a la cual se le adjuntó esa resolución, como un elemento esencial de prueba, no implica de mi parte retraso judicial injustificado alguno en cuanto a la imputación que se me hace, pues al estar en poder del ente investigador dicha resolución, le permitirá a dicho ente, que éste, examine los motivos en los que se fundamentó la denuncia, así como realizar cualquier peritaje que fuera necesario sobre el documento original y no sobre fotocopia o copia certificada como desacertadamente lo indica la supervisión apelante, para así, determinar la existencia eventual de algún ilícito. Por lo anterior, demuestro que mi conducta no constituye la falta grave que se me endilga en la queja tramitada en mi contra, sino por el contrario, sólo demuestro que he actuado apegada a la Constitución y a la ley. Sumado a lo anterior, nunca tuve en mi poder la totalidad de las actuaciones que constituyen el expediente sino únicamente la resolución que entregué con la denuncia que interpusé ante el Ministerio Público el mismo día en la que la recibí, por las razones antes apuntadas. Por eso es que en el documento anteriormente indicado, identifiqué un posible abuso del poder público, encargado a jueces con lo cual se violenta la norma en perjuicio del interés general y el interés público, además era posible que se hubiese cometido abuso del cargo por acciones u omisiones en el ejercicio de la función pública, dado a que hubo ocultamiento o violación de la confianza encargada por la Constitución Política de la República a un funcionario depositario del poder público, lo que conlleva a que, haber firmado la resolución sin haber intervenido en la sesión ordinaria del pleno de la Corte Suprema de Justicia del cinco de octubre de dos mil dieciséis, constituyo un acto intencional que da como resultado una representación errónea de lo realmente ocurrido. La Supervisión

del

General de Tribunales al momento de interponer su recurso de apelación extrae pasajes aislados de la resolución impugnada lo cual hace incurrir en error, puesto que al momento de hacer un análisis integral de la misma, toda vez que la Junta de Disciplina Judicial consideró que: " esta Junta de Disciplina Judicial, tiene claro que no se puede extraer o sacar de cualquier forma una actuación de los tribunales, considerando también que toda obligación en determinado momento y bajo determinadas circunstancias puede tener una excepción, ya que tal como sucedió en el presente caso en donde la Magistrada denunciada para fundamentar su denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (...) siendo además, la prueba más importante en ese momento por la denuncia presentada, y por las circunstancia y estructura en que se encuentra la corte suprema de Justicia ... ": por lo que ha quedado plenamente demostrado que la remisión de dicha resolución fue en cumplimiento a la obligación de presentar denuncia. Con base a lo anteriormente indicado SOLICITO que al resolver se declare SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la Supervisión General de Tribunales.-----

CONSIDERANDO III

El Consejo de la Carrera Judicial, al realizar el análisis de la resolución emitida por la Junta de Disciplina Judicial de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, contenida en los folios del seiscientos setenta y uno al seiscientos ochenta y siete del expediente disciplinario, así como del análisis y estudio de las actuaciones procesales determina que: I) En cuanto al abogado Jaime Amílcar González Dávila, se determina que con su actuar no incurrió en falta disciplinaria, debido a que el documento signado por su persona era únicamente un proyecto de resolución de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, dentro de las diligencias de antejuicio número doscientos cincuenta y cinco guión dos mil dieciséis (255-2016), toda vez que el artículo 143 de la Ley del Organismo Judicial establece: *"Requisitos. Toda resolución judicial llevará, necesariamente, el nombre del tribunal que la dicte, el lugar, la fecha, su contenido, la cita de leyes y las firmas completas del juez, del magistrado o de los*



20-2017
6 de 8

GUATEMALA, C.A.

Consejo de la Carrera Judicial

magistrados, en su caso, y del secretario, o sólo la de éste cuando esté legalmente autorizado para dictar providencias o decretos de puro trámite." (el resaltado es propio) y por su parte el artículo 108 de dicha ley establece: "Artículo 108. Secretarios. En cada uno de los Tribunales de justicia habrá un secretario que autorice las resoluciones que se dicten y las diligencias que se practiquen; y además, el personal que requiera el servicio..."; en ese sentido, este Consejo puede establecer que el documento que firmó el funcionario denunciado, cuya fotocopia obra en folio veintiséis al veintiocho del expediente disciplinario, no es una resolución sino un proyecto de resolución que en ningún momento nació a la vida jurídica y por tanto no puede tomarse como un acto que constituya comisión de falta disciplinaria, toda vez que no llena los requisitos descritos en los artículos citados, misma que por su naturaleza y temporalidad no nació a la vida jurídica y por ende incapaz de surtir efectos legales que menoscabaran derechos y obligaciones, lo anterior se confirma con el hecho de que el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, fue emitida la resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia, cuya fotocopia obra en folio seiscientos veintiocho al seiscientos treinta del expediente disciplinario, la cual se encuentra debidamente autorizada y que por tanto sí surtió los efectos legales y que corresponde, en cuanto a su contenido, al proyecto de resolución que en su momento firmara el abogado Jaime Amílcar González Dávila. De otra parte, este Consejo determina que el funcionario judicial denunciado fue inducido a error por parte del oficial Marlon Antonio Santos Figueroa, quien fue el encargado de llevar y poner a disposición del funcionario denunciado el documento para su firma, toda vez que debía, previo a llevar el documento para su firma, corroborar quién debía firmar el documento referido, para evitar precisamente inducir a error a los funcionarios que firmaran dicho documento, lo cual fue manifestado en el informe de investigación de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, el cual obra en folio ochenta y uno del expediente disciplinario, al indicar en las consideraciones de hecho y de derecho lo

real

siguiente: "... o sea que dicho oficial indujo a error al Magistrado González Dávila.." (Refiriéndose al señor Marlon Antonio Santos Figueroa), lo cual fue confirmado con la declaración testimonial que dicho oficial prestara en la audiencia de mérito ante la Junta de Disciplina Judicial, en donde expresó al ser preguntado "...k) ¿Entonces cómo es que aparece el Licenciado Jaime Amílcar integrando en esa resolución si nadie dio una instrucción que el integrara? Respondió: "repito por la urgencia del caso acudí primeramente a la Sala Primera para integrar quien efectivamente me integró, y acudí a la Sala Segunda pero en ese momento no se encontraba el Magistrado titular, y no me dieron indicaciones a qué hora regresaba, y por la urgencia del caso, procedí a la Sala Tercera quien el Licenciado Amílcar, amablemente nos integró"; l) ¿O sea que usted fue a una Sala y no encontró al Magistrado quien iba a firmar y como no lo encontró se fue a la Sala donde estaba el Licenciado Jaime para integrar? Respondió: "así es"; (...) ñ) ¿Podría decirse con lo que usted indicó que fue usted el que decidió ir a esa Sala a obtener la firma del Magistrado porque no estaba el Magistrado que le correspondía firmar? Respondió: "si, como trabajo cotidiano, con integración de firmas siempre tratamos de integrar con los Magistrados que nos colaboran". En ese sentido, se establece que el actuar del abogado Jaime Amílcar González Dávila no es constitutivo de falta, pues no puede encuadrarse como negligencia, pues ésta debe entenderse como aquella omisión más o menos voluntaria pero consciente de poner la diligencia debida en los asuntos que conoce y que tiene consecuencias jurídicas graves, lo cual como ya se estableció, no ocurre en el presente caso, pues el funcionario actuó como producto de la negligencia del auxiliar judicial que lo indujo a error y que no produjo ninguna consecuencia jurídica, pues del documento firmado no nació a la vida jurídica, tal como se indicó, contrario a lo que manifiesta la Honorable Junta de Disciplina al indicar que para sancionar al abogado Jaime Amílcar González Dávila, lo hizo: "...tomando en consideración las circunstancias en que se cometió el hecho ya descritas, así como la gravedad del daño causado..."; por lo anterior el actuar del funcionario judicial denunciado no encuadra dentro de ninguna de las faltas que señala la Ley de la Carrera Judicial, por lo tanto debe revocarse



20-2017
7 de 8

GUATEMALA, C.A.

Consejo de la Carrera Judicial

parcialmente la resolución apelada dejando sin efecto los numerales I de la parte resolutive de dicha resolución, y modificando la resolución apelada, en el sentido de declarar sin lugar la denuncia presentada en contra del abogado Jaime Amílcar González Dávila, en su calidad de Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, por lo considerado. II) Con relación a los señalamientos de la Supervisión General de Tribunales contra la abogada María Eugenia Morales Aceña de Sierra, este Consejo al realizar el análisis que corresponde, determina que el actuar de la Magistrada Morales Aceña, fue acertado al denunciar un acto que por su naturaleza era su deber denunciar, ante la posibilidad de que se tratara de un ilícito penal, según lo estipulan los artículos 297 y 298 del Código Procesal Penal, de tal manera que la Magistrada denunciada, para fundamentar su denuncia ante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, optó por presentar como evidencia, el objeto del hecho denunciado en el presente proceso disciplinario, consistente en el proyecto de resolución final de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente a las diligencias de antejuicio número doscientos cincuenta y cinco guión dos mil dieciséis (255-2016), lo cual a criterio de este Consejo, realizó en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo como funcionaria pública, pues ante la posible comisión de un ilícito penal, la funcionaria judicial denunciada tenía la obligación de presentar la denuncia correspondiente, para que fuera en ente investigador quien determinara lo relacionado a la existencia de un posible delito, tal como lo establece el artículo 457 del Código Penal *"Artículo 457. El funcionario o empleado público que, por razón de su cargo, tuviere conocimiento de la comisión de un hecho calificado como delito de acción pública y, a sabiendas, omitiere a retardare hacer la correspondiente denuncia a la autoridad judicial competente, será sancionado con multa de cien a un mil quetzales."*; así mismo, se determina que en el presente caso, no existe un atraso injustificado por parte de la Magistrada Morales Aceña, pues en primer lugar, tal como lo indica la funcionaria

denunciada en el memorial de evacuación de audiencia, no recibió la totalidad de las actuaciones del antejuicio doscientos cincuenta y cinco guión dos mil dieciséis (255-2016), sino únicamente el proyecto de resolución, el cual fue remitido al Ministerio Público conforme a lo ya considerado, por lo que de haberse producido un atraso, éste tenía su justificación en que el mismo se derivó del cumplimiento de una obligación en el ejercicio del cargo, como lo es la obligación de denunciar un posible ilícito penal. De lo anterior se determina que la Magistrada María Eugenia Morales Aceña actuó en cumplimiento de sus funciones, pues de no hacerlo, hubiera incurrido en responsabilidad, por lo que el recurso de apelación presentado por la Supervisión General de Tribunales es improcedente y por tanto debe declararse sin lugar, confirmando el numeral II de la parte resolutive de la resolución impugnada.-----

DISPOSICIONES LEGALES APLICADAS: Artículos citados y los siguientes: 2, 12, 28, 44, 46, 203, 204, 205 y 209 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 13, 141, 142, 171 y 143 de la Ley del Organismo Judicial; 4, 5, 6, 27, 28, 37, 38, 40, 41, 49, 51 y 54 del Decreto 41-99 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Carrera Judicial; 18, 19 inciso n) y 33 del Reglamento General del Decreto 41-99 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Carrera Judicial; 1, 2, 4, 6, 68 y 74 del Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Carrera Judicial. -----

POR TANTO:

Este Consejo con base en lo considerado y leyes invocadas al resolver **DECLARA: I. SIN LUGAR** el recurso de apelación interpuesto por **LA SUPERVISION GENERAL DE TRIBUNALES**, contra la resolución emitida por la Junta de Disciplina Judicial el seis de marzo de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar la denuncia promovida en contra de la abogada **MARIA EUGENCIA MORALES ACEÑA DE SIERRA**, en su calidad de Magistrada Vocal Décimo Segunda de la Corte Suprema de Justicia; y como consecuencia del anterior pronunciamiento, se **CONFIRMA** el numeral II de la resolución impugnada II.



GUATEMALA, C.A.



20-2017
8 de 8

Consejo de la Carrera Judicial

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado JAIME AMILCAR GONZÁLEZ DÁVILA, contra la resolución emitida por la Junta de Disciplina Judicial el seis de marzo de dos mil diecisiete; y como consecuencia del anterior pronunciamiento, MODIFICA el numeral I de la resolución impugnada, el cual queda así: I. SIN LUGAR la denuncia promovida en contra del abogado JAIME AMILCAR GONZÁLEZ DÁVILA, en su función de Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, por las razones consideradas. III. Se REVOCAN los numerales IV y V de la resolución impugnada por las razones consideradas. IV. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes a la Junta de Disciplina Judicial.

MAGISTRADO NERY OSVALDO MEDINA MENDEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE LA CARRERA JUDICIAL

Licda. Lillian Carlota Iten G.
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
ANTE EL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL

Lic. Carlos Antonio Aguilar Revolorio
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA
ASAMBLEA DE MAGISTRADOS ANTE
EL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL

Licda. Dora Lizett Nájera Flores
REPRESENTANTE TITULAR DE LA
UNIDAD DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL

Licenciada Claudia Elvira González
REPRESENTANTE TITULAR DE LA
ASAMBLEA DE JUECES

Lic. Osvaldo Alejandro Aguilar Calderón
Secretario Ejecutivo del Consejo de la Carrera Judicial a.i.



EXPEDIENTE 20.

SEÑORES DE LA COMISION DE POSTULACION PARA LA ELECCION DE
MAGISTRADOS DE CORTE DE SUPREMA DE JUSTICIA.

JAIME AMILCAR GONZALEZ DAVILA, de cincuenta y siete años de edad, casado, guatemalteco, abogado y notario, de este domicilio, señalo como lugar para recibir citaciones y notificaciones la oficina profesional situada en la tercera avenida nueve guion sesenta y nueve, segundo nivel, oficina dos guion ocho de la zona uno de esta ciudad capital, por este medio comparezco a EVACUAR LA AUDIENCIA que me fuera conferida por el SEÑALAMIENTO DE IMPEDIMENTO A MI POSTULACION PARA MAGISTRADO DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, que interpusiera en mi contra LA FUNDACION MYRNA MACK, para lo cual atentamente:

E X P O N G O.

I.- El artículo 14, numeral 7) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: "... Nadie puede ser procesado o penado de nuevo por una infracción por la cual ya ha sido definitivamente absuelto o condenado de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país...". De lo anterior se estima que, para que sea dable aplicar el principio *non bis in idem*, es necesario que una persona ya haya sido procesada por un hecho, y que, como resultado, se haya emitido una decisión final que resuelva el asunto de controversia, evitando, con ello, un doble procesamiento por la misma causa, lo que imposibilita su persecución, de nueva cuenta, por el mismo suceso.

II.- La denunciante alega que no soy idóneo en relación a mi honorabilidad para ocupar el cargo de Magistrado, fundamentándose y sustentando el citado impedimento en el siguiente hecho, que literalmente dice: "I. Durante su actuación

como Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, el Magistrado González Dávila, admitió haber firmado una resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia en la que no participó. Por estos hechos se siguió un trámite en su contra en el sistema disciplinario del Organismo Judicial, en el cual se le endilgó posible negligencia en los deberes propios de su cargo. A dicho caso le corresponde el número de Expediente 789-2016 JDJ.” II.- Como quedó anotado en el numeral romano anterior, el referido argumento tiene como sustento que firmé una resolución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia en la que no participé y que por esos hechos se siguió un trámite en mi contra en el Sistema Disciplinario del Organismo Judicial, en la cual se me **endilgó posible negligencia en los deberes propios de mi cargo**. A dicha denuncia le corresponde el número de expediente 789-2016 JDJ.

III.- El artículo 26 de la ley de lo Contencioso Administrativo establece: Integración: En lo que fuere aplicable, el proceso contencioso administrativo se integrará con las normas de la Ley del Organismo Judicial y Código Procesal Civil y Mercantil; así también el artículo 126, ordena: Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. **Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión**; quien contradice la pretensión del adversario, ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impositivas de esa pretensión...” Al verificar el memorial contentivo del señalamiento de impedimento a la postulación de mi persona al cargo de Magistrado a la Corte Suprema de Justicia interpuesto por la FUNDACION MYRNA MACK, **se constata que en ningún apartado del mismo OFRECE O PROPONE MEDIOS DE PRUEBA CON LOS CUALES PRETENDA ACREDITAR LA PRETENSION DE**

QUE MI PERSONA NO SEA CONSIDERADA DENTRO DE LA LISTA DE NOMBRES QUE SE REMITA AL CONGRESO DE LA REPUBLICA POR NO SER IDONEO PARA EL CARGO, por lo que dicha pretensión debe de ser rechazada in limine toda vez que no basta con decir o asegurar hechos que perjudiquen a una persona sin probar los mismos, porque se puede tener razón, pero si no se demuestra no se alcanzará procesalmente un resultado favorable, toda vez que es preciso una actividad probatoria para confirmar las afirmaciones de hecho realizadas por las partes aún en un proceso administrativo como el que nos ocupa toda vez que legalmente es necesario probar la verdad de un hecho controvertido del cual depende el derecho que pretendo de ser incluido en el listado de candidatos a Magistrado de Corte Suprema de Justicia que oportunamente será remitido por esta comisión al Congreso de la República de Guatemala. Como podrá verificar esta comisión la señora HELEN BEATRIZ MACK CHANG, NI SIQUIERA ACREDITA LA REPRESENTACION CON QUE ACTUA, toda vez que si bien es cierto acompaña una fotocopia simple de su nombramiento como Representante legal de la fundación antes nombrada, también lo es que el hecho de que el proceso administrativo sea regido por un principio anti formalista, también lo es que UN ACTO COMO EL DE PROBAR QUE EFECTIVAMENTE ES LA REPRESENTANTE LEGAL DE UNA INSTITUCION LEGALMENTE CONSTITUIDA DEBE PROBARLO, y si no posee el documento que acredite tal hecho por lo menos debe pedirlo a esta institución que lo requiera a donde corresponde. **EN CONCLUSION:** El señalamiento de impedimento a mi postulación como Magistrado a la Corte Suprema de Justicia DEBE DE SER RECHAZADO IN LIMINE POR NO ACOMPAÑAR MEDIO PROBATORIO ALGUNO CON EL CUAL PRETENDA ACREDITAR SU PRTENSION.

IV.- Aunque la Fundación Mack NO acredite el impedimento interpuesto en mi contra y en cumplimiento lo establecido en el artículo 126 de la ley antes civil nombrada, he de manifestar que lo aseverado por la mencionada fundación es totalmente falaz **toda vez que en ningún momento firmé RESOLUCION ALGUNA POR LA CUAL SE LE CAUSARA PERJUICIO TANTO A TERCERAS PERSONAS COMO A LA PROPIA ADMINISTRACION DE JUSTICIA**, ya que el documento que me fuera remitido a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que actualmente presido, **FUE UN PROYECTO DE RESOLUCION DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS**, es decir un documento que no había nacido a la vida jurídica ya que el mismo, no solamente, no estaba firmado o signado por la totalidad de los Magistrados que integraron el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que le dio origen al mencionado PROYECTO DE RESOLUCION, sino que tampoco estaba firmado por el propio SECRETARIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, es decir, nunca jamás se cometió falta alguna, sea de cualquier tipo de naturaleza, porque tal y como lo aseveré en el procedimiento disciplinario que al que oportunamente fui sometido y que dio origen a la formación del expediente número 789-2016 JDJ, para que una resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia naciera a la vida jurídica la misma debe de estar firmada por la totalidad de los Magistrados que conforman ese alto organismo del Estado y por el propio Secretario, tal y como lo ordena la Ley del Organismo Judicial en su artículo 143, que literalmente dice: **"Requisitos.** Toda resolución judicial llevará, necesariamente, el nombre del tribunal que la dicte, el lugar, la fecha, su contenido, la cita de leyes **y las firmas completas del juez, del magistrado o de los magistrados, en su caso, y el secretario, o sólo la de**

éste cuando esté legalmente autorizado para dictar providencias o decretos de puro trámite” (el resaltado es propio). Así también el artículo 108 de la mencionada ley establece: **Secretarios:** En cada uno de los tribunales habrá un secretario que autorice las resoluciones que se dicten y las diligencias que se practiquen; y además, el personal que requiera el servicio...” -----.

V.- El documento que oportunamente firmé y que es de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis y que le dio origen al proceso disciplinario antes mencionado, no es una resolución sino un proyecto de resolución que en ningún momento nació a la vida jurídica, por tanto NO se pudo tomar como un acto que constituya la comisión de una falta disciplinaria y por lo mismo jamás pudo ni siquiera generar duda de mi honorabilidad, no solamente en mi actuar como persona particular, sino en aquella en donde actúo como administrador de justicia, **además de que la citada resolución aparte de no nacer a la vida jurídica y por ende incapaz de surtir efectos legales que menoscabaran derechos y obligaciones de terceros, porque tal y como lo aseveré con anterioridad, lo que firmé fue un simple proyecto de resolución.**

VI.- Además quedó demostrado en el proceso disciplinario al que fui sometido como sujeto pasivo, que FUI INDUCIDO A ERROR PARA FIRMAR EL MENCIONADO PROYECTO POR PARTE DEL OFICIAL III DE LA VOCALIA IX DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, MARLON ANTONIO SANTOS FIGUEROA, quien fue la persona encargada de llevar y poner a disposición de mi persona el citado documento para que lo firmara, toda vez que debía, previo a llevar el documento para su firma, corroborar que persona o personas debían de firmar el citado documento para evitar precisamente inducir a error a los funcionarios que firmarían dicho documento, lo que fue debidamente informado

por la Licenciada Ana Patricia Lainfiesta Martínez, Supervisora Auxiliar de la Supervisión General de Tribunales, **EN EL INFORME QUE OPORTUNAMENTE PRESENTÓ, EL CUAL INDICA EN SUS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO LO SIGUIENTE: “c)... A lo anterior se suma la declaración del oficial de vocalía Marlon Antonio Santos Figueroa, que al ser entrevistado claramente establece que al no encontrar al Magistrado Gustavo Dubón por la urgencia del caso rápidamente acudió a la Sala Tercera del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, y procedió a integrar con el magistrado Presidente de dicha Sala Jaime González Dávila; o sea que dicho oficial indujo a error al Magistrado González Dávila...”**. De lo anterior se pudo establecer que mi actuar no fue negligente, pues debemos de entender a la negligencia como aquella omisión más o menos voluntaria pero consiente de poner la diligencia debida en los asuntos que se conocen y que tienen consecuencias jurídicas graves, lo que jamás ocurrió en mi caso, pues mi actuación fue producto de la negligencia del auxiliar judicial antes nombrado que me indujo a error y que nunca produjo alguna consecuencia jurídica pues en mi calidad de Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente, constantemente integraba los plenos de la Corte Suprema de Justicia y cuyas resoluciones no eran emitidas en ese momento, sino que se remitían días después a los despachos de los Magistrados que integraron dichos plenos para la firma respectiva, fue así como el día que firmé el citado documento, el mismo iba adjunto a todos los documentos pendientes de firma de plenos anteriores, **razón por la cual tanto el proceso disciplinario iniciado en mi contra fue declarado sin lugar, así como la acción de Antejuicio que el Ministerio Público y la Comisión Internacional**

contra la Impunidad en Guatemala, presentaron en mi contra y por consiguiente **EN NINGUN MOMENTO FUI SANCIONADO POR EL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, COMO POR ORGANO JURISDICCIONAL ALGUNO**, ya que el citado documento únicamente era un proyecto de resolución y por lo mismo al no estar firmado por la totalidad de los Magistrados que integraron el pleno que le dio origen a dicho documento ni por el propio Secretario de la Corte Suprema de Justicia, **jamás se le causó daño a la Administración de Justicia, ni a terceros que pudieran tener interés en el asunto.**

VII.- Como lo asevere con anterioridad la denunciante no presentan medio de prueba alguno con el cual acredite su pretensión, mas sin embargo con la prueba documental que acompaño y que consiste en certificación de la resolución emitida por el Consejo de la Carrera Judicial dentro del expediente número 20-2017 de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete por medio de la cual declaró **CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR MI PERSONA CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA JUNTA DE DISCIPLINA JUDICIAL EL SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE Y COMO CONSECUENCIA MODIFICÓ EL NUMERAL PRIMERO DE DICHA RESOLUCION, LA CUAL QUEDÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: "I. SIN LUGAR LA DENUNCIA PROMOVIDA EN CONTRA DEL ABOGADO JAIME AMILCAR GONZALEZ DAVILA, en su función de Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente, por las razones consideradas. III. SE REVOCAN los numerales IV y V de la resolución impugnada, por las razones consideradas...".**

EN CONCLUSIÓN: El hecho que le da origen al impedimento interpuesto en mi contra ya fue juzgado en más de una oportunidad, ya que si bien es cierto se dictó

por parte de la Junta de Disciplina Judicial resolución sancionatoria, la misma fue dejada sin efecto y sin validez legal alguna cuando el Consejo de la Carrera Judicial declaró con lugar el Recurso de Apelación que interpuse en contra de la resolución dictada por la citada Junta; Además tanto el Ministerio Público como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentaron en mi contra ante la Corte Suprema de Justicia con fundamento en el hecho que le dio origen a la denuncia administrativa antes relacionada, SOLICITUD DE ANTEJUICIO EN CONTRA DE MI PERSONA, **ACCION FUE RECHAZADA EN FORMA LIMINAR TAL Y COMO CONSTA EN LA RESOLUCION DE FECHA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS**, que acompaño al presente; por lo que en atención al Principio *non bis in idem*, al que hice referencia en el numeral romano I, de este memorial, LA DENUNCIA INTERPUESTA EN MI CONTRA NO SOLAMENTE DEBE SER RECHAZADA POR HABER SIDO JUZGADO EL HECHO EN QUE SE FUNDAMENTA LA MISMA EN MÁS DE UNA OPORTUNIDAD, sino también porque la entidad denunciante NI SIQUIERA ACREDITA LA REPRESENTACION CON QUE ACTÚA LA INTERPONENTE DEL SEÑALAMIENTO, ADEMÁS DE NO ACOPAÑAR MEDIO PROBATORIO ALGUNO CON EL CUAL PRETENDA ACREDITAR SU PRETENSION.

Por lo anteriormente expuesto propongo los siguientes medios de:

P R U E B A.

I.- Certificación emitida por la Coordinadora II del Archivo General de Tribunales de fecha veinticinco de octubre del año dos mil diecinueve que contiene la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia el veintiuno de noviembre del dos mil dieciséis, en la que resuelve **RECHAZAR IN LIMINE la solicitud de Antejuicio presentada en mi contra tanto por el Ministerio Publico como por**

la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, que acompaño al presente.

II.- Certificación de fecha veintinueve de octubre del año dos mil diecinueve emitida por La Secretaria Ejecutiva A.I. del Consejo de la Carrera Judicial de la República de Guatemala, que contiene la resolución dictada dentro del expediente CCJ NO. 20-2017. Ref. 789-2016 JDJ, por medio de la cual se resolvió declarar sin lugar la denuncia promovida en mi contra en mi función de Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que acompaño al presente.

III.- Presunciones legales y humanas.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Artículo 20 de la Ley de Comisiones de Postulación, el cual establece "...Las Comisiones verificarán la información que recaben, excluyendo la que no pueda ser confirmada, y notificarán al día siguiente al profesional, quien deberá ser escuchado dentro de un plazo de cinco días, con el objeto que presente sus pruebas de descargo si las tuviere."

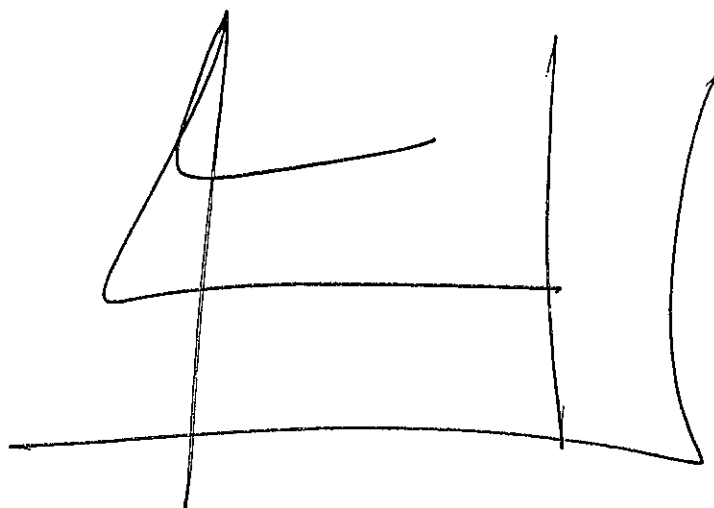
P E T I C I O N .

- 1.- Que se admita para su trámite el presente memorial y se agregue a sus antecedentes.
- 2.- Que en la forma expuesta se tenga por evacuada la audiencia conferida.
- 3.- Que se tengan por presentados los medios probatorios que se acompañan al presente memorial.
- 4.- Que al dictar la resolución que en derecho corresponde se RECHACE EN FORMA LIMINAR EL SEÑALAMIENTO INTERPUESTO EN MI CONTRA POR LA FUNDACION MYRNA MACK, POR HABER SIDO JUZGADO EN MAS DE UNA

OCASIÓN POR EL MISMO HECHO DENUNCIADO; o de lo contrario por no acreditar la entidad denunciante los hechos en que fundamenta su denuncia, o bien declarar sin lugar la denuncia interpuesta por la fundación antes mencionada y consecuentemente SE CONSIDERE A MI PERSONA COMO UNA PERSONA CON HONORABILIDAD, CAPACIDAD E IDONEIDAD, para ser incluido en el listado de candidatos que si cumplen con los requisitos para poder ser electo como MAGISTRADO DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Acompaño original y copia del presente memorial y documentos adjuntos, así también acompaño formato digital (PDF).

En la Ciudad de Guatemala, el 12 de Febrero del año 2020.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a horizontal line and a vertical line, with a large 'L' shape to the right.

Lic. Jaime Amílcar González Dávila
Magistrado Presidente
Sala Tercera de la Corte de Apelaciones
del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Guatemala, veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis. -----

I) Se integra con los Magistrados suscritos. II) Se tienen a la vista para resolver las diligencias de antejuicio promovidas por el MINISTERIO PÚBLICO a través del Agente Fiscal abogado FÉLIX ENRIQUE ARIAS FLORES y la COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA, a través de su mandataria judicial con representación abogada ASTRID ODETE ESCOBEDO BARRONDO, contra el abogado JAIME AMÍLCAR GONZÁLEZ DÁVILA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE.

ANTECEDENTES

Señalan los denunciantes que con fecha diez de octubre del presente año, el Ministerio Público conoció de la denuncia interpuesta por MARÍA EUGENIA MORALES ACEÑA, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia en la cual hace referencia a los siguientes hechos: el cinco de octubre de dos mil dieciséis se realizó la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Sesiones, ubicada en el tercer nivel del Palacio de Justicia. En el punto tres, durante la sesión los magistrados integrantes de la Cámara de Amparo y Antejuicios Nester Mauricio Vásquez Pimentel, Silvia Patricia Valdés Quezada y Vitalina Orellana y Orellana, sometieron a conocimiento del pleno diferentes expedientes de amparos y antejuicios. Dentro de los antejuicios, el entonces Presidente de la referida Cámara, presentó el antejuicio identificado con el número doscientos cincuenta y cinco guion dos mil dieciséis, promovido por el Ministerio Público a través de la agente fiscal Flor de María Samayoa Quiñónez, contra los diputados al Congreso

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



de la República de Guatemala ARISTIDES BALDOMERO CRESPO VILLEGAS, CHRISTIAN JAQUES BOUSSINOT NUILA, LUIS ARMANDO RABBÉ TEJADA, MANUEL MARCELINO GARCÍA CHUTÁ, CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GIRÓN y CÉSAR EMILIO FAJARDO MORALES, por hechos derivados de una denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas.

Al hacer referencia al antejuicio, la Magistrada Silvia Verónica García Molina se inhibió de conocer, por lo que se convocó a integrar al Magistrado de Sala de Apelaciones Gustavo Adolfo Dubón Gálvez y al Magistrado Freedyn Waldemar Fernández Ortiz que integró el pleno por ausencia del magistrado José Antonio Pineda Barales.

Expuso la Magistrada Morales Aceña que el Magistrado Nester Mauricio Vásquez Pimentel, se comprometió a recoger las firmas personalmente para evitar fuga de información y en virtud de los votos disidentes que era necesario razonar. Manifiesta la referida Magistrada que el diez de octubre de dos mil dieciséis le fue entregado en su despacho por su asistente, la resolución original señalada anteriormente, para efectos de proceder a firmar, pero al revisar el documento original se percató que aparece la firma del Magistrado Jaime Amilcar González Dávila, Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, quien no fue convocado, no se presentó y en ningún momento integró la Corte, no estudió el caso, no emitió su voto ante el Pleno de Magistrados, ni ante el Secretario de la Corte Suprema de Justicia, por lo que considera que existe una falsedad, razón por la cual, en cumplimiento de su función como servidora pública y ciudadana guatemalteca formuló la denuncia e hizo entrega a la fiscalía del Ministerio Público, de una carpeta color verde con la impresión en letras doradas donde se lee: "Corte



Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio. MSC Néstor Mauricio Vásquez Pimentel Magistrado Vocal XI", en cuyo interior se encuentra la resolución original que fue puesta a disposición para firma (de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis), dentro de las diligencias de antejuicio identificadas con el número doscientos cincuenta y cinco guion dos mil dieciséis que constan de cinco páginas, contenidas en tres folios. Indican las entidades denunciantes que en virtud de "haber plasmado su firma en la aludida, afirmó, dio firmeza y seguridad de algo, de lo que él no conoció, por lo que las mismas se constituyen falsas" (sic).

CONSIDERANDO I

El procedimiento de antejuicio es una garantía que preserva las funciones de la administración estatal, impidiendo que los funcionarios sean imputados por razones ilegítimas, políticas o espurias. La Corte de Constitucionalidad ha sostenido el criterio que previo a determinar la admisibilidad a trámite de un antejuicio, corresponde a la Corte Suprema de Justicia analizar si la denuncia reúne los requisitos básicos de admisibilidad, siendo estos: a) que el Ministerio Público o persona denunciante proporcionen, elementos de razonabilidad suficientes sustentados en una investigación seria y previa realizada; b) que al interponente de la denuncia o querella le consten directamente los hechos, salvo el caso de antejuicios directamente presentados por el Ministerio Público; y, c) que la denuncia o querella no se promueva por razones espurias, políticas o ilegítimas. (Expediente dos mil cuarenta guion dos mil tres (2040-2003), sentencia de fecha veinticinco de marzo de dos mil cuatro, expediente dos mil cuarenta y dos guion dos mil tres (2042-2003), sentencia de fecha tres de mayo de dos mil cuatro, expediente dos mil cuarenta y tres guion dos mil tres (2043-2003), sentencia de fecha veintidós de diciembre de dos mil tres, expediente seiscientos treinta y

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



cuatro guion dos mil cinco (634-2005), sentencia de fecha ocho de agosto del año dos mil cinco y expediente dos mil ciento diez guion dos mil seis (2110-2006), sentencia del uno de marzo del año dos mil siete).

CONSIDERANDO II

Del análisis del expediente de antejuicio, se advierte que el punto medular de la denuncia es el hecho que la resolución de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, dictada por la Corte Suprema de Justicia dentro de las diligencias de antejuicio número doscientos cincuenta y cinco guion dos mil dieciséis, fue firmada por el magistrado denunciado, quien, según indican los denunciantes no conoció de dicho expediente, no integró Corte ese día y tampoco estuvo presente en la sesión plenaria correspondiente. Al respecto, esta Corte determina que la resolución indicada aún no estaba totalmente firmada porque faltaban las firmas de la Magistrada Vocal Décimo Segundo María Eugenia Morales Aceña y del Secretario de la Corte Suprema de Justicia Rony Eulalio López Contreras, consecuentemente la misma no nació a la vida jurídica, no era una resolución perfecta, siendo que para que tuviera validez debió ser firmada por la totalidad de los magistrados y autorizada por el Secretario de conformidad con el artículo 143 de la Ley del Organismo Judicial, que establece: *"Toda resolución judicial llevará, necesariamente, el nombre del tribunal que la dicte, el lugar, la fecha, su contenido, la cita de leyes y las firmas completas del juez, del magistrado o de los magistrados, en su caso y del secretario (...)"*, en el mismo sentido, el artículo 108 del citado cuerpo legal estipula: *"En cada uno de los Tribunales de justicia habrá un secretario que autorice las resoluciones que se dicten y las diligencias que se practiquen (...)"*.

Siendo que la resolución del cinco de octubre de dos mil dieciséis, tampoco fue notificada, por lo tanto no causó efectos ni consecuencias jurídicas a las partes, de



manera que no se puede establecer la existencia de indicios racionales que orienten a pensar que la actitud del funcionario denunciado, podría revestir características propias de ilícitos penales.

Dentro del anterior contexto, es oportuno traer a cuenta que para admitir a trámite un antejuicio deben existir, suficientes indicios que sustenten la posibilidad de que el denunciado pudo incurrir en actos que probablemente revisten las características de uno o varios ilícitos. Ante la inexistencia de esos indicios, esta Corte concluye que la denuncia fue presentada por motivos espurios e ilegítimos, lo que trae como consecuencia su rechazo *in limine*.

LEYES APLICABLES

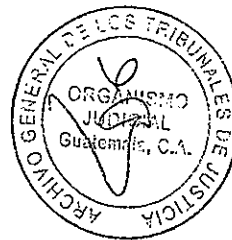
Artículos citados y: 1, 2, 12, 175, 203, 204 y 214 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 3, 7, 9, 10, 11, 11 Bis y 20 del Código Procesal Penal; 1, 3, 4, 12, y 14 de la Ley en Materia de Antejuicio; 16, 23, 51, 75, 77, 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial.

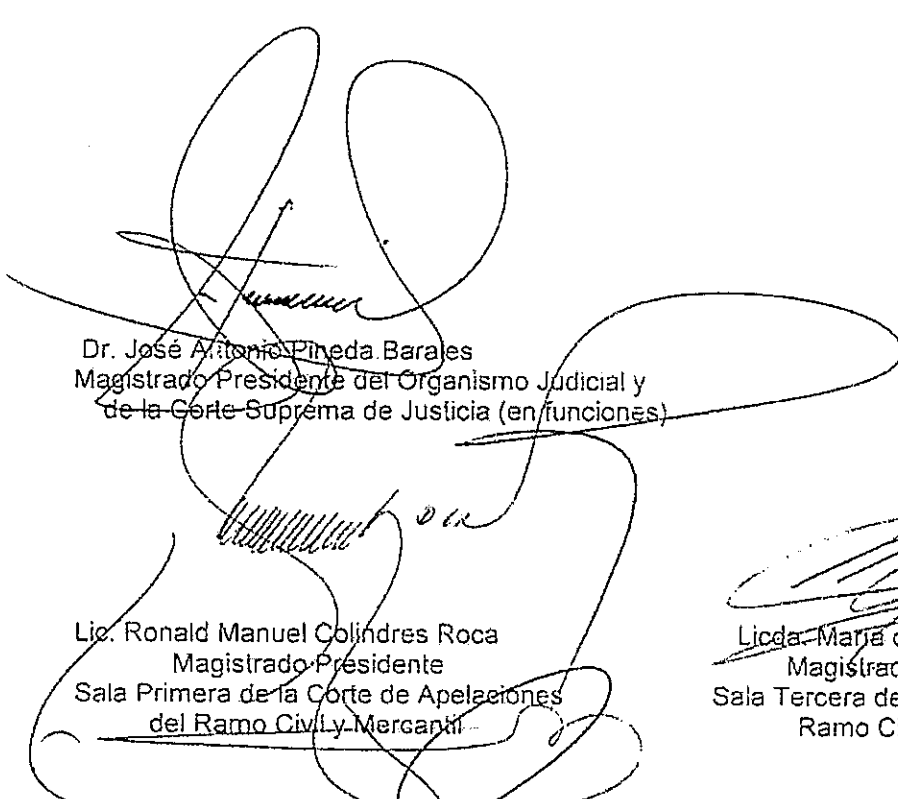
POR TANTO


La Corte Suprema de Justicia, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver declara: I) Rechazar *in limine* la solicitud de antejuicio promovida por el **MINISTERIO PÚBLICO** a través de su Agente Fiscal abogado FÉLIX ENRIQUE ARIAS FLORES y la **COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA**, a través de su mandataria judicial con representación abogada ASTRID ODETE ESCOBEDO BARRONDO contra el abogado **JAIME AMÍLCAR GONZÁLEZ DÁVILA**, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE. II) Notifíquese.

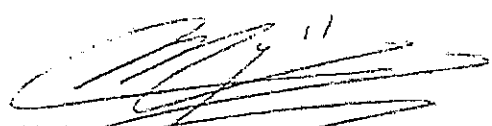
PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

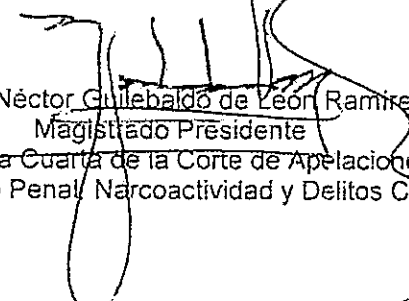
CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
GUATEMALA, C.A.





Dr. José Antonio Pineda Barales
Magistrado Presidente del Organismo Judicial y
de la Corte Suprema de Justicia (en funciones)



Lic. Ronald Manuel Colindres Roca
Magistrado Presidente
Sala Primera de la Corte de Apelaciones
del Ramo Civil y Mercantil

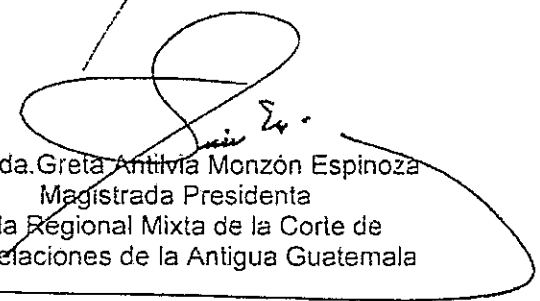

Licda. María de la Luz Gómez Mejía
Magistrada Presidenta
Sala Tercera de la Corte de Apelaciones
Ramo Civil y Mercantil


Lic. Néctor Guilebaldo de León Ramírez
Magistrado Presidente
Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del
Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente


Lic. Cesar Augusto Avila Aparicio
Magistrado Presidente
Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Chiquimula


Lic. Noé Adalberto Ventura Loyo
Magistrado Presidente
Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, de
Delitos de Femicidio y Otras formas de Violencia
contra la Mujer y Violencia Sexual


Lic. Urias Eliazar Batista Orozco
Magistrado Presidente
Sala Regional Mixta de la Corte de
Apelaciones de Jalapa


Licda. Greta Antivia Monzón Espinoza
Magistrada Presidenta
Sala Regional Mixta de la Corte de
Apelaciones de la Antigua Guatemala



Lic. César Augusto López López,
Magistrado Presidente de la Sala Quinta de la
Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social

Lic. Domingo Ulban Fajardo
Magistrado Presidente
Sala Segunda del Tribunal de la Contencioso Administrativo

Lic. Guillermo Demetrio España Mérida
Magistrado Presidente
Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
GUATEMALA, C.A.

Licda. Juana Solís Rosaes
Magistrada Presidente
Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Licda. Cecilia Odeltho Moseoso Arriaza de Salazar
Secretaria de la Corte Suprema de Justicia (en funciones)



GUATEMALA, C.A.

**LA INFRASCRITA COORDINADORA II DEL ARCHIVO GENERAL DE
TRIBUNALES**

CERTIFICA:

Que tuvo a la vista el **ANTEJUICIO** identificado con el número **CUATROCIENTOS GUION DOS MIL DIECISEIS** de la **CAMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**. En el cual figuran como interponente: **MINISTERIO PUBLICO Y COMISION INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA** en contra de: **MAGISTRADO PRESIDENTE JAIME AMILCAR GONZALEZ DAVILA DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE**. Que las fotocopias que anteceden fueron reproducidas de su original el día de hoy en mí presencia, las cuales contienen: **I).** Reproducción de los folios setenta y cinco (75) al setenta y ocho (78) del expediente arriba identificado. Y para los usos legales que al Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente: **JAIME AMILCAR GONZALEZ DAVILA** convengan, extendiendo, numero, sello y firmo la presente certificación, compulsada en **SIETE** hojas de papel especial para fotocopias únicamente en su lado anverso, más la presente hojas oficio de papel bond, la cual tiene impreso el membrete del Organismo Judicial. Guatemala, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve.-



CDA. CARMEN LUCIA NAJARRO RUANO
COORDINADORA II
ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES



GUATEMALA, C.A.

NÚMERO 400-2016 - CAMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-----

ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES. Guatemala, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. **I).** Se admite para su trámite la solicitud que antecede y documento adjunto, agréguese a sus antecedentes. **II).** Resolviendo en definitiva a costa del interesado y con las formalidades de ley, extiéndase la certificación solicitada del proceso arriba identificado.

Artículos: 14, 28, 29, 30 y 31 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 141, 142, 143 y del 171 al 177 de la Ley del Organismo Judicial




LICDA. CARMEN LUCIA HAJARRO RUANO
COORDINADORA II
ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES

En esta fecha recibí conforme la resolución que antecede y la certificación solicitada.-----

Guatemala, _____ de _____ de 2019. HORA: _____

FIRMA: _____ NOMBRE: _____

DPI: _____ EXTENDIDA EN: _____

Consejo de la Carrera Judicial

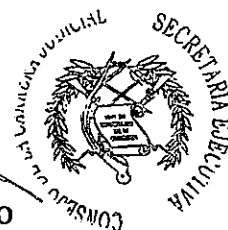
LA INFRASCRITA SECRETARIA EJECUTIVA A.I. DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.-----


Certifica:

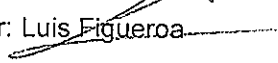
Que las ocho hojas de papel fotocopia que anteceden, las primeras siete impresas en su anverso y reverso y la octava únicamente en su lado anverso que reproducen fielmente la resolución fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, correspondiente al expediente CCJ - veinte guión dos mil diecisiete del Consejo de la Carrera Judicial, referencia JDJ setecientos ochenta y nueve guión dos mil dieciséis de la Junta de Disciplina Judicial, (CCJ-20-2017 ref. 789-2016 JDJ), apelación promovido por el abogado Jaime Amilcar González Dávila, Magistrado Presidente de Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala.-----

Y para entregar al abogado Jaime Amilcar González Dávila, extendiendo, numero, sello y firma la presente, en nueve hojas, las primeras ocho hojas de fotocopia y la presente hoja de papel simple con membrete del Consejo de la Carrera Judicial; en la ciudad de Guatemala, el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve.-----


Licda. Evelyn Jeannette Hernández Castillo
Secretaria Ejecutiva a.i. del Consejo de la Carrera Judicial

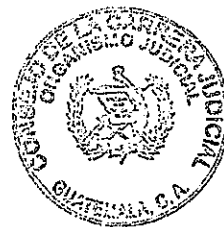


Elaborado por: Arturo Cusca 

Revisado por: Luis Figueroa 



GUATEMALA, C.A.



20-2017
1 de 8

Consejo de la Carrera Judicial

EXPEDIENTE 20-2017. CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL. Guatemala, veintinueve de mayo de dos mil diecisiete.

I. Con base en la Opinión Consultiva de la Corte de Constitucionalidad de fecha nueve de enero de dos mil diecisiete, emitida dentro del expediente cinco mil novecientos once guion dos mil dieciséis (5911-2016) y el artículo 74 del Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Carrera Judicial, se procede a dictar la presente resolución. II. En apelación y con sus antecedentes se examina la resolución emitida por la Junta de Disciplina Judicial de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, contenida en folios del seiscientos setenta y uno al seiscientos ochenta y siete del expediente disciplinario número setecientos ochenta y nueve guion dos mil dieciséis (789-2016), que en su parte conducente literalmente indica: "POR TANTO: Esta JUNTA DE DISCIPLINA JUDICIAL, con fundamento en lo considerado y leyes citadas, al resolver por unanimidad, DECLARA: I) CON LUGAR la denuncia promovida en contra del abogado JAIME AMILCAR GONZÁLEZ DÁVILA, en su calidad de Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, como consecuencia por una falta leve estipulada en el artículo 39 literal d) de la Ley de la Carrera Judicial, se le impone de conformidad con el artículo 42 de la misma ley literal "a", la sanción de una AMONESTACIÓN ESCRITA. II) SIN LUGAR la denuncia promovida en contra de la abogada MARIA EUGENCIA MORALES ACEÑA DE SIERRA, en su calidad de Magistrada Vocal Decimo Segunda de la Corte Suprema de Justicia. III) EXHORTAR al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que con auxilio de la Unidad Administrativa que consideren pertinente establezcan reglas claras y precisas a efecto de unificar el trabajo administrativo que cada uno de los Magistrados realiza en sus propias Cámaras y que es integrado al Pleno, a efecto de evitar retrasos y descuidos, en perjuicio de la seguridad jurídica y dar cumplimiento a lo prescrito en la Ley del Organismo Judicial y

Reglamento General de Tribunales. IV) Al quedar firme el presente fallo, el mismo debe ser ejecutado. V) En su oportunidad procesal, certifíquese al Consejo de la Carrera Judicial, para que haga efectiva la anotación respectiva y oportunamente archívense las actuaciones; VI) notifíquese." -----

ANTECEDENTES:

DEL HECHO QUE ATRIBUYE LA SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES:

"Porque usted abogado Jaime Amílcar Gózales Dávila, en su calidad de Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramos Penal, narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, incurrió en negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo, al suscribir la resolución de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, dictada dentro de las diligencias de antejuicio número doscientos cincuenta y cinco guión dos mil dieciséis (255-2016) ya que no tuvo participación en el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en la deliberación y aprobación de dicha resolución por lo que incurrió en la falta leve prevista en el artículo 39 literal d) de la ley de la Carrera Judicial. II) "A) "Porque usted abogada María Eugenia Morales Aceña de Sierra, en su calidad de Magistrada Vocal Décimo Segunda de la Corte Suprema de Justicia incurrió en atraso y descuido injustificado en el trámite y resolución final de las diligencias de antejuicio número doscientos cincuenta y cinco guión dos mil dieciséis, ya que el día diez de octubre de dos mil dieciséis, le fue entregado dicho expediente para que suscribiera la resolución final de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, pero en lugar de suscribirla la remitió a la Fiscalía contra la Impunidad del Ministerio Público, por lo que se hizo necesario pedir su devolución y fue hasta el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, conociera nuevamente dicha resolución y le diera validez. Por lo que su conducta encuadra en la falta grave prevista en el artículo 40 literal b) de la Ley de la Carrera Judicial, Decreto 41-99 del Congreso de la República; B) Porque usted Abogada María Eugenia Morales Aceña de Sierra en su calidad de Magistrada Vocal Décimo Segunda de la Corte



Consejo de la Carrera Judicial

Suprema de Justicia incurrió en negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo, ya que desde el diez de octubre de dos mil dieciséis, sustrajo del expediente de diligencias de Antejuicio número doscientos cincuenta y cinco guión dos mil dieciséis, el original de la resolución de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis y lo remitió a la Fiscalía Contra la Impunidad del Ministerio Público, inobservando lo estipulado en el artículo 171 de la Ley del Organismo Judicial. Por lo que su conducta encuadra en la falta leve prevista en el artículo 39 literal d) de la Ley de la Carrera Judicial, Decreto 41-99 del Congreso de la República" -----

CONSIDERANDO I

DE LA PROCEDENCIA DEL ANÁLISIS DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO. De conformidad con el artículo 51 del decreto 41-99 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Carrera Judicial, contra las resoluciones de la Junta de Disciplina Judicial, se podrá interponer recurso de apelación ante el Consejo de la Carrera Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación; en el presente caso el recurso de apelación fue presentado en tiempo; así mismo, se establece que la resolución impugnada es de carácter definitivo, pues pone fin al proceso disciplinario, por lo que se cumple con lo establecido en el artículo 19 literal n) del Reglamento General de la Ley de la Carrera Judicial (Decreto 41-99), y de conformidad con el artículo 74 del Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Carrera Judicial, es procedente efectuar su análisis legal.-----

CONSIDERANDO II

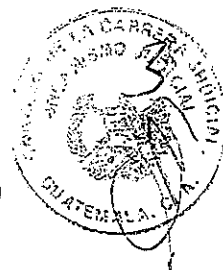
DE LO EXPUESTO POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCESO DISCIPLINARIO.-----

LA SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES, AL EVACUAR LA AUDIENCIA CONFERIDA MANIFESTÓ: "La razón de esta gestión es EVACUAR LA AUDIENCIA que

se confiere a la Supervisión General de Tribunales, con relación al recurso de apelación que se interpusiera en contra de la resolución de fecha 06 de marzo de 2017, proferida por la Junta de Disciplina Judicial dentro del expediente administrativo disciplinario número 789-2016 JDJ, para lo cual REITERO los conceptos vertidos en memorial de fecha 17 de marzo de 2017, pues como se indicó en el mismo, mi representada difiere de lo resuelto con relación a la Magistrada Morales Aceña de Sierra, porque en la parte considerativa del fallo literalmente se expresa que: Quedó acreditado que en su calidad de Magistrada Vocal Décimo Segunda de la Corte Suprema de Justicia le fue entregada el día diez de octubre de dos mil dieciséis, para que suscribiera, la resolución final de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente a las diligencias de antejuicio número doscientos cincuenta y cinco guión dos mil dieciséis, pero contrario a suscribirla la remitió a la Fiscalía Contra la Impunidad del Ministerio Público en esa misma fecha, para fundamentar la denuncia presentada en virtud que fue suscrita por el Abogado Jaime Amúlcár González Dávila, Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, quien no participó en la discusión y aprobación de la misma. Tal razonamiento era suficiente para declarar con lugar la denuncia, toda vez que la Propia Junta de Disciplina Judicial consideró que el hecho imputado quedó debidamente probado. Sin embargo, en forma contradictoria y sin fundamento legal valedero declara sin lugar la denuncia formulada en contra de la funcionaria judicial denunciada, expresando que: "...lo anteriormente acreditado de conformidad con las pruebas ya valoradas no se considera por parte de los integrantes de esta Junta de Disciplina Judicial, que revista características de una o varias faltas administrativas ...", porque en atención a lo dispuesto por el artículo 298 del Código Procesal Penal, "... existe una obligación inexcusable de forma genérica para los empleados y funcionarios públicos de denunciar ante las autoridades señaladas en el artículo anterior el conocimiento que tengan de la comisión de un hecho que podría ser calificado como delito,



GUATEMALA, C.A.



20-2017
3 de 8

Consejo de la Carrera Judicial

incluso dicha omisión se encuentra tipificada como delito omisión de denuncia, el cual se desarrolla en el artículo 457 del Código Penal ... ". Con relación a ello, esta Supervisión estima procedente que la funcionaria judicial denunciada haya hecho del conocimiento del Ministerio Público el hecho en que incurrió el señor Magistrado, pero no en la forma como lo hizo, pues lo procedente hubiese sido acompañar como evidencia a la denuncia, una fotocopia simple o una certificación del documento original que contenía la resolución final de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente a las diligencias de antejuicio número doscientos cincuenta y cinco guión dos mil dieciséis, pero no sustraer del expediente el original de la resolución y remitirlo a la Fiscalía contra la Impunidad del Ministerio Público, pues con ello contravino lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley del Organismo Judicial, que establece que los expedientes de las actuaciones que practiquen los tribunales no deben salir de la oficina, pudiendo darse a quienes lo soliciten, fotocopias simples o certificaciones, exceptuando de esta regla únicamente los procesos fenecidos que, con fines docentes soliciten las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, excepción que no se da en el caso que nos ocupa. Con base en lo anterior se evidencia la procedencia del recurso de apelación interpuesto únicamente en contra de lo resulto en el numeral II) de la resolución final que se impugnó, que declara sin lugar la denuncia promovida en contra de la Abogada María Eugenia Morales Aceña de Sierra, en su calidad de Magistrada Vocal Décimo Segunda de la Corte Suprema de Justicia."-----

LA PARTE DENUNCIADA, ABOGADO JAIME AMILCAR GONZÁLEZ DAVILA, AL EVACUAR LA AUDIENCIA CONFERIDA MANIFESTÓ: "La Junta de Disciplina Judicial, para sostener la decisión ahora impugnada, se fundamenta en la declaración del testigo Marlon Antonio Santos Figueroa y en la resolución de la Corte Suprema de Justicia que repone la resolución que fue firmada, entre otros, por mi persona, porque la misma fue enviada en original al Ministerio Público; asimismo, con el expediente de antejuicio que

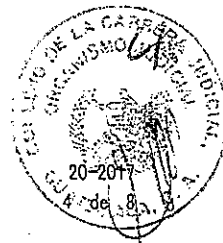
F. Aul

→

ⓧ

[Signature]

incluye la resolución que contiene mi firma en donde se dice no participé en el pleno de la Corte. Lo anteriormente descrito, señores del Consejo, pone en evidencia que la Junta para resolver el presente caso no observó la recta y correcta aplicación de la sana crítica razonada al momento de valorar la prueba; en efecto, en relación a la prueba que dice la Junta que sirvió de base para sancionarme, he de señalar que la misma bajo ninguna circunstancia demuestra la comisión de la falta señalada, toda vez que la declaración prestada por el testigo pone de manifiesto que él únicamente estaba recolectando firmas para lo que sería una resolución y al momento en que se hizo la denuncia y se repusieron actuaciones, la misma jamás había nacido a la vida jurídica ni había causado efectos negativos contra ninguna persona o a la administración de justicia, razón por la cual, jamás podía sancionárseme, evidenciándose únicamente los yerros en que la propia Corte Suprema de Justicia incurre en la tramitación de sus asuntos, por lo que esa declaración jamás podía utilizarse en mi perjuicio, dados los efectos que jamás produjo el proyecto de resolución que se firmó. El expediente de antejuicio donde aparece mi firma, tampoco podía valorarse en mi perjuicio, toda vez que, como ya se dijo, la resolución o proyecto de resolución, jamás nació a la vida jurídica, quedándose ello, simplemente en nada, porque esa resolución además, se repuso por otra que fue la que finalmente produjo sus efectos legales correspondientes y, fuera de ello, no existe otro medio de prueba que la Junta haya tenido para resolver como lo hizo, por tanto, no existe medio de prueba que demuestre la comisión de la falta por la que se me sancionó. La Junta de Disciplina Judicial, para resolver, obvió que conforme los artículos 214 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 75 de la Ley del Organismo Judicial, la Corte Suprema de Justicia se integra por trece magistrados y que una resolución para que surta todos sus efectos, debe conforme los artículos 108 y 143 de la Ley del Organismo Judicial, estar firmada por la totalidad de los magistrados y del secretario; en el caso concreto, lo que la Junta llama resolución firmada por mi persona (y que para mí es un proyecto de resolución), jamás fue firmada por la



Consejo de la Carrera Judicial

totalidad de los magistrados, como tampoco por el Secretario de la Corte, razón por la cual, jamás nació a la vida jurídica y, por ende, no podía ocasionar ningún daño a persona alguna o a la administración de justicia que son precisamente los efectos que se requieren, conforme el último párrafo del artículo 35 del Reglamento General de la Ley de la Carrera Judicial Decreto 41-99 del Congreso de la República de Guatemala, para sancionarme, lo cual, no sólo no fue ni siquiera mencionado, menos demostrado por los medios legales correspondientes, es más, existe como prueba dentro del procedimiento disciplinario la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que claramente decidió no admitir a trámite un antejuicio promovido en mi contra derivado de los mismos hechos ahora analizados, precisamente, porque eso que se llama resolución, jamás fue firmada por todos los ya mencionados y porque nunca tuvo vida jurídica, de manera que para lo penal no existe ilícito y para lo administrativo si existe responsabilidad disciplinaria, no obstante que para ambos casos, la resolución que para mí es un proyecto, jamás nació a la vida jurídica y, con ello, se advierte inseguridad jurídica. Otro aspecto relevante no analizado dentro de la sana crítica razonada por la Junta, lo es que en eso que se llama resolución firmada por mi persona aparecen varias firmas ilegibles sin sellos de magistrados y se desconoce de quienes podrían ser esas firmas y sobre las que junto con la que aparece de mi persona no existe peritaje que demuestre que las anteriores firmas eran de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de Salas de Corte de Apelaciones u otros Tribunales de igual categoría que hubiesen firmado y, ello, lo que pone en evidencia es que la Junta de Disciplina Judicial por no aplicar correctamente la sana crítica razonada, obvió también, evaluar el contexto en que se produjo al firma de ese proyecto resolución, lo cual, era esencial, pues ese es el objeto de aplicar esa valoración para no caer en arbitrariedad en la decisión que se adopte que es precisamente lo que sucedió en el presente caso. Finalmente, se no se aprecia en la resolución ahora impugnada, ese claro razonamiento sobre los puntos vertidos y expuestos

precedentemente que, además, fueron invocados dentro las etapas procedimentales de la audiencia señalada oportunamente, careciendo de esa ausencia de razonamiento, que limita e impide mi legítimo derecho de defensa y a la tutela efectiva, ello, amerita que mi apelación sea declarada con lugar, en consecuencia se revoque la decisión asumida, se declare sin lugar la denuncia y se ordene el archivo de las actuaciones."-----

LA OTRA PARTE DENUNCIADA, ABOGADA MARÍA EUGENIA MORALES ACEÑA,
AL EVACUAR LA AUDIENCIA CONFERIDA MANIFESTÓ: "La honorable Junta de Disciplina Judicial dictó resolución con fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, la cual en su numeral romano II) declaró sin lugar la denuncia promovida en mi contra; sin embargo, la Supervisión General de Tribunales por medio de la Supervisora de Tribunales Irma del Rosario Castro Juárez, presentó recurso de apelación en contra de dicha resolución en su numeral antes descrito, aceptando de manera tácita el resto del contenido de la resolución y aceptando asimismo que en ningún momento existió negligencia en mi actuar. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE TORNAN INVIABLE LOS ARGUMENTOS DE APELACIÓN PRESENTADOS POR LA SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES Y QUE POSIBILITAN SE CONFIRME LA RESOLUCIÓN QUE SEIMPUGNA DICTADA A MI FAVOR. En cuanto a lo argumentado por la Supervisión General de Tribunales, me permito indicar que, tal como lo indiqué en la audiencia oral y pública que se celebró el día veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, es importante indicar que, la promoción de una denuncia es obligatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 298 del Código Procesal Penal, por lo que, era mi deber acompañarle los elementos de prueba en los que apoyé la misma, tal como lo establece el artículo 299 de esa ley procesal penal, razón por la cual, no se produjo retraso injustificado alguno que se me pretendiera endilgar, debido a que, la remisión de la citada resolución al ente investigador, deriva de la obligación legal antes indicada, ello para demostrar con base en la denuncia que oportunamente presenté, que se produjo un ilícito en una resolución o documento público de esa naturaleza,



Consejo de la Carrera Judicial

específicamente, por haberla firmado un magistrado suplente, quien nunca integró el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para analizar y resolver en cuanto a esas diligencias de antejuicio específicas y que se individualizó en autos. De ahí que, desde ninguna perspectiva legal, el hecho que una resolución esté en poder del Ministerio Público, derivado de una denuncia a la cual se le adjuntó esa resolución, como un elemento esencial de prueba, no implica de mi parte retraso judicial injustificado alguno en cuanto a la imputación que se me hace, pues al estar en poder del ente investigador dicha resolución, le permitirá a dicho ente, que éste, examine los motivos en los que se fundamentó la denuncia, así como realizar cualquier peritaje que fuera necesario sobre el documento original y no sobre fotocopia o copia certificada como desacertadamente lo indica la supervisión apelante, para así, determinar la existencia eventual de algún ilícito. Por lo anterior, demuestro que mi conducta no constituye la falta grave que se me endilga en la queja tramitada en mi contra, sino por el contrario, sólo demuestro que he actuado apegada a la Constitución y a la ley. Sumado a lo anterior, nunca tuve en mi poder la totalidad de las actuaciones que constituyen el expediente sino únicamente la resolución que entregué con la denuncia que interpusé ante el Ministerio Público el mismo día en la que la recibí, por las razones antes apuntadas. Por eso es que en el documento anteriormente indicado, identifiqué un posible abuso del poder público, encargado a jueces con lo cual se violenta la norma en perjuicio del interés general y el interés público, además era posible que se hubiese cometido abuso del cargo por acciones u omisiones en el ejercicio de la función pública, dado a que hubo ocultamiento o violación de la confianza encargada por la Constitución Política de la República a un funcionario depositario del poder público, lo que conlleva a que, haber firmado la resolución sin haber intervenido en la sesión ordinaria del pleno de la Corte Suprema de Justicia del cinco de octubre de dos mil dieciséis, constituyo un acto intencional que da como resultado una representación errónea de lo realmente ocurrido. La Supervisión

General de Tribunales al momento de interponer su recurso de apelación extrae pasajes aislados de la resolución impugnada lo cual hace incurrir en error, puesto que al momento de hacer un análisis integral de la misma, toda vez que la Junta de Disciplina Judicial consideró que: " esta Junta de Disciplina Judicial, tiene claro que no se puede extraer o sacar de cualquier forma una actuación de los tribunales, considerando también que toda obligación en determinado momento y bajo determinadas circunstancias puede tener una excepción, ya que tal como sucedió en el presente caso en donde la Magistrada denunciada para fundamentar su denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (...) siendo además, la prueba más importante en ese momento por la denuncia presentada, y por las circunstancias y estructura en que se encuentra la corte suprema de Justicia ... "; por lo que ha quedado plenamente demostrado que la remisión de dicha resolución fue en cumplimiento a la obligación de presentar denuncia. Con base a lo anteriormente indicado SOLICITO que al resolver se declare SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la Supervisión General de Tribunales.-----

CONSIDERANDO III

El Consejo de la Carrera Judicial, al realizar el análisis de la resolución emitida por la Junta de Disciplina Judicial de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, contenida en los folios del seiscientos setenta y uno al seiscientos ochenta y siete del expediente disciplinario, así como del análisis y estudio de las actuaciones procesales determina que: I) En cuanto al abogado Jaime Amílcar González Dávila, se determina que con su actuar no incurrió en falta disciplinaria, debido a que el documento signado por su persona era únicamente un proyecto de resolución de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, dentro de las diligencias de antejuicio número doscientos cincuenta y cinco guión dos mil dieciséis (255-2016), toda vez que el artículo 143 de la Ley del Organismo Judicial establece: *"Requisitos. Toda resolución judicial llevará, necesariamente, el nombre del tribunal que la dicte, el lugar, la fecha, su contenido, la cita de leyes y las firmas completas del juez, del magistrado o de los*



GUATEMALA, C.A.

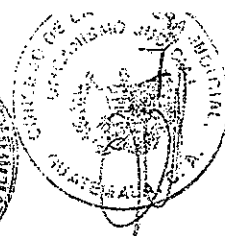


20-2017
6 de 8

Consejo de la Carrera Judicial

magistrados, en su caso, y del secretario, o sólo la de éste cuando esté legalmente autorizado para dictar providencias o decretos de puro trámite." (el resaltado es propio) y por su parte el artículo 108 de dicha ley establece: "Artículo 108. Secretarios. En cada uno de los Tribunales de justicia habrá un secretario que autorice las resoluciones que se dicten y las diligencias que se practiquen; y además, el personal que requiera el servicio..."; en ese sentido, este Consejo puede establecer que el documento que firmó el funcionario denunciado, cuya fotocopia obra en folio veintiséis al veintiocho del expediente disciplinario, no es una resolución sino un proyecto de resolución que en ningún momento nació a la vida jurídica y por tanto no puede tomarse como un acto que constituya comisión de falta disciplinaria, toda vez que no llena los requisitos descritos en los artículos citados, misma que por su naturaleza y temporalidad no nació a la vida jurídica y por ende incapaz de surtir efectos legales que menoscabaran derechos y obligaciones, lo anterior se confirma con el hecho de que el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, fue emitida la resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia, cuya fotocopia obra en folio seiscientos veintiocho al seiscientos treinta del expediente disciplinario, la cual se encuentra debidamente autorizada y que por tanto sí surtió los efectos legales y que corresponde, en cuanto a su contenido, al proyecto de resolución que en su momento firmara el abogado Jaime Amílcar González Dávila. De otra parte, este Consejo determina que el funcionario judicial denunciado fue inducido a error por parte del oficial Marlon Antonio Santos Figueroa, quien fue el encargado de llevar y poner a disposición del funcionario denunciado el documento para su firma, toda vez que debía, previo a llevar el documento para su firma, corroborar quién debía firmar el documento referido, para evitar precisamente inducir a error a los funcionarios que firmaran dicho documento, lo cual fue manifestado en el informe de investigación de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, el cual obra en folio ochenta y uno del expediente disciplinario, al indicar en las consideraciones de hecho y de derecho lo

siguiente: "... o sea que dicho oficial indujo a error al Magistrado González Dávila.." (Refiriéndose al señor Marlon Antonio Santos Figueroa), lo cual fue confirmado con la declaración testimonial que dicho oficial prestara en la audiencia de mérito ante la Junta de Disciplina Judicial, en donde expresó al ser preguntado "...k) ¿Entonces cómo es que aparece el Licenciado Jaime Amílcar integrando en esa resolución si nadie dio una instrucción que el integrara? Respondió: "repito por la urgencia del caso acudí primeramente a la Sala Primera para integrar quien efectivamente me integró, y acudí a la Sala Segunda pero en ese momento no se encontraba el Magistrado titular, y no me dieron indicaciones a qué hora regresaba, y por la urgencia del caso, procedí a la Sala Tercera quien el Licenciado Amílcar, amablemente nos integró"; l) ¿O sea que usted fue a una Sala y no encontró al Magistrado quien iba a firmar y como no lo encontró se fue a la Sala donde estaba el Licenciado Jaime para integrar? Respondió: "así es"; (...) ñ) ¿Podría decirse con lo que usted indicó que fue usted el que decidió ir a esa Sala a obtener la firma del Magistrado porque no estaba el Magistrado que le correspondía firmar? Respondió: "sí, como trabajo cotidiano, con integración de firmas siempre tratamos de integrar con los Magistrados que nos colaboran". En ese sentido, se establece que el actuar del abogado Jaime Amílcar González Dávila no es constitutivo de falta, pues no puede encuadrarse como negligencia, pues ésta debe entenderse como aquella omisión más o menos voluntaria pero consciente de poner la diligencia debida en los asuntos que conoce y que tiene consecuencias jurídicas graves, lo cual como ya se estableció, no ocurre en el presente caso, pues el funcionario actuó como producto de la negligencia del auxiliar judicial que lo indujo a error y que no produjo ninguna consecuencia jurídica, pues del documento firmado no nació a la vida jurídica, tal como se indicó, contrario a lo que manifiesta la Honorable Junta de Disciplina al indicar que para sancionar al abogado Jaime Amílcar González Dávila, lo hizo: "...tomando en consideración las circunstancias en que se cometió el hecho ya descritas, así como la gravedad del daño causado..."; por lo anterior el actuar del funcionario judicial denunciado no encuadra dentro de ninguna de las faltas que señala la Ley de la Carrera Judicial, por lo tanto debe revocarse



20-2017
7 de 8

Consejo de la Carrera Judicial

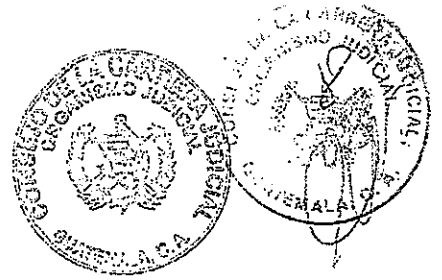
parcialmente la resolución apelada dejando sin efecto los numerales I de la parte resolutive de dicha resolución, y modificando la resolución apelada, en el sentido de declarar sin lugar la denuncia presentada en contra del abogado Jaime Amílcar González Dávila, en su calidad de Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, por lo considerado. II) Con relación a los señalamientos de la Supervisión General de Tribunales contra la abogada María Eugenia Morales Aceña de Sierra, este Consejo al realizar el análisis que corresponde, determina que el actuar de la Magistrada Morales Aceña, fue acertado al denunciar un acto que por su naturaleza era su deber denunciar, ante la posibilidad de que se tratara de un ilícito penal, según lo estipulan los artículos 297 y 298 del Código Procesal Penal, de tal manera que la Magistrada denunciada, para fundamentar su denuncia ante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, optó por presentar como evidencia, el objeto del hecho denunciado en el presente proceso disciplinario, consistente en el proyecto de resolución final de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente a las diligencias de antejuicio número doscientos cincuenta y cinco guión dos mil dieciséis (255-2016), lo cual a criterio de este Consejo, realizó en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo como funcionaria pública, pues ante la posible comisión de un ilícito penal, la funcionaria judicial denunciada tenía la obligación de presentar la denuncia correspondiente, para que fuera en ente investigador quien determinara lo relacionado a la existencia de un posible delito, tal como lo establece el artículo 457 del Código Penal *"Artículo 457. El funcionario o empleado público que, por razón de su cargo, tuviere conocimiento de la comisión de un hecho calificado como delito de acción pública y, a sabiendas, omitiere a retardare hacer la correspondiente denuncia a la autoridad judicial competente, será sancionado con multa de cien a un mil quetzales."*; así mismo, se determina que en el presente caso, no existe un atraso injustificado por parte de la Magistrada Morales Aceña, pues en primer lugar, tal como lo indica la funcionaria

denunciada en el memorial de evacuación de audiencia, no recibió la totalidad de las actuaciones del antejuicio doscientos cincuenta y cinco guión dos mil dieciséis (255-2016), sino únicamente el proyecto de resolución, el cual fue remitido al Ministerio Público conforme a lo ya considerado, por lo que de haberse producido un atraso, éste tenía su justificación en que el mismo se derivó del cumplimiento de una obligación en el ejercicio del cargo, como lo es la obligación de denunciar un posible ilícito penal. De lo anterior se determina que la Magistrada María Eugenia Morales Aceña actuó en cumplimiento de sus funciones, pues de no hacerlo, hubiera incurrido en responsabilidad, por lo que el recurso de apelación presentado por la Supervisión General de Tribunales es improcedente y por tanto debe declararse sin lugar, confirmando el numeral II de la parte resolutive de la resolución impugnada.-----

DISPOSICIONES LEGALES APLICADAS: Artículos citados y los siguientes: 2, 12, 28, 44, 46, 203, 204, 205 y 209 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 13, 141, 142, 171 y 143 de la Ley del Organismo Judicial; 4, 5, 6, 27, 28, 37, 38, 40, 41, 49, 51 y 54 del Decreto 41-99 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Carrera Judicial; 18, 19 inciso n) y 33 del Reglamento General del Decreto 41-99 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Carrera Judicial; 1, 2, 4, 6, 68 y 74 del Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Carrera Judicial. -----

POR TANTO:

Este Consejo con base en lo considerado y leyes invocadas al resolver DECLARA: I. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por LA SUPERVISION GENERAL DE TRIBUNALES, contra la resolución emitida por la Junta de Disciplina Judicial el seis de marzo de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar la denuncia promovida en contra de la abogada MARIA EUGENCIA MORALES ACEÑA DE SIERRA, en su calidad de Magistrada Vocal Décimo Segunda de la Corte Suprema de Justicia; y como consecuencia del anterior pronunciamiento, se CONFIRMA el numeral II de la resolución impugnada II.



20-2017
8 de 8

Consejo de la Carrera Judicial

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado JAIME AMILCAR GONZÁLEZ DÁVILA, contra la resolución emitida por la Junta de Disciplina Judicial el seis de marzo de dos mil diecisiete; y como consecuencia del anterior pronunciamiento, MODIFICA el numeral I de la resolución impugnada, el cual queda así: I. SIN LUGAR la denuncia promovida en contra del abogado JAIME AMILCAR GONZÁLEZ DÁVILA, en su función de Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, por las razones consideradas. III. Se REVOCAN los numerales IV y V de la resolución impugnada por las razones consideradas. IV. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes a la Junta de Disciplina Judicial.

MAGISTRADO NERY OSVALDO MEDINA MENDEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE LA CARRERA JUDICIAL

Licda. Lillian Carlota Iten G.
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
ANTE EL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL

Lic. Carlos Antonio Aguilar Revoloro
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA
ASAMBLEA DE MAGISTRADOS ANTE
EL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL

Licda. Dora Lizett Nájera Flores
REPRESENTANTE TITULAR DE LA
UNIDAD DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL

Licenciada Claudia Elvira González
REPRESENTANTE TITULAR DE LA
ASAMBLEA DE JUECES

Lic. Osvaldo Alejandro Aguilar Calderón
Secretario Ejecutivo del Consejo de la Carrera Judicial a.i.



EXPEDIENTE 20.

SEÑORES DE LA COMISION DE POSTULACION PARA LA ELECCION DE
MAGISTRADOS DE CORTE DE SUPREMA DE JUSTICIA.

JAIME AMILCAR GONZALEZ DAVILA, de cincuenta y siete años de edad, casado, guatemalteco, abogado y notario, de este domicilio, señalo como lugar para recibir citaciones y notificaciones la oficina profesional situada en la tercera avenida nueve guion sesenta y nueve, segundo nivel, oficina dos guion ocho de la zona uno de esta ciudad capital, por este medio comparezco a EVACUAR LA AUDIENCIA que me fuera conferida por el SEÑALAMIENTO DE IMPEDIMENTO A MI POSTULACION PARA MAGISTRADO DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, que interpusiera en mi contra LA FUNDACION MYRNA MACK, para lo cual atentamente:

EXPONGO.

I.- El artículo 14, numeral 7) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece: "... Nadie puede ser procesado o penado de nuevo por una infracción por la cual ya ha sido definitivamente absuelto o condenado de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país...". De lo anterior se estima que, para que sea dable aplicar el principio *non bis in idem*, es necesario que una persona ya haya sido procesada por un hecho, y que, como resultado, se haya emitido una decisión final que resuelva el asunto de controversia, evitando, con ello, un doble procesamiento por la misma causa, lo que imposibilita su persecución, de nueva cuenta, por el mismo suceso.

II.- La denunciante alega que no soy idóneo en relación a mi honorabilidad para ocupar el cargo de Magistrado, fundamentándose y sustentando el citado impedimento en el siguiente hecho, que literalmente dice: "I. Durante su actuación

como Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, el Magistrado González Dávila, admitió haber firmado una resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia en la que no participó. Por estos hechos se siguió un trámite en su contra en el sistema disciplinario del Organismo Judicial, en el cual se le endilgó posible negligencia en los deberes propios de su cargo. A dicho caso le corresponde el número de Expediente 789-2016 JDJ.” II.- Como quedó anotado en el numeral romano anterior, el referido argumento tiene como sustento que firmé una resolución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia en la que no participé y que por esos hechos se siguió un trámite en mi contra en el Sistema Disciplinario del Organismo Judicial, en la cual se me **endilgó posible negligencia en los deberes propios de mi cargo**. A dicha denuncia le corresponde el número de expediente 789-2016 JDJ.

III.- El artículo 26 de la ley de lo Contencioso Administrativo establece: Integración: En lo que fuere aplicable, el proceso contencioso administrativo se integrará con las normas de la Ley del Organismo Judicial y Código Procesal Civil y Mercantil; así también el artículo 126, ordena: Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. **Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión**; quien contradice la pretensión del adversario, ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impositivas de esa pretensión...” Al verificar el memorial contentivo del señalamiento de impedimento a la postulación de mi persona al cargo de Magistrado a la Corte Suprema de Justicia interpuesto por la FUNDACION MYRNA MACK, **se constata que en ningún apartado del mismo OFRECE O PROPONE MEDIOS DE PRUEBA CON LOS CUALES PRETENDA ACREDITAR LA PRETENSION DE**

QUE MI PERSONA NO SEA CONSIDERADA DENTRO DE LA LISTA DE NOMBRES QUE SE REMITA AL CONGRESO DE LA REPUBLICA POR NO SER IDONEO PARA EL CARGO, por lo que dicha pretensión debe de ser rechazada in limine toda vez que no basta con decir o asegurar hechos que perjudiquen a una persona sin probar los mismos, porque se puede tener razón, pero si no se demuestra no se alcanzará procesalmente un resultado favorable, toda vez que es preciso una actividad probatoria para confirmar las afirmaciones de hecho realizadas por las partes aún en un proceso administrativo como el que nos ocupa toda vez que legalmente es necesario probar la verdad de un hecho controvertido del cual depende el derecho que pretendo de ser incluido en el listado de candidatos a Magistrado de Corte Suprema de Justicia que oportunamente será remitido por esta comisión al Congreso de la República de Guatemala. Como podrá verificar esta comisión la señora HELEN BEATRIZ MACK CHANG, NI SIQUIERA ACREDITA LA REPRESENTACION CON QUE ACTUA, toda vez que si bien es cierto acompaña una fotocopia simple de su nombramiento como Representante legal de la fundación antes nombrada, también lo es que el hecho de que el proceso administrativo sea regido por un principio anti formalista, también lo es que UN ACTO COMO EL DE PROBAR QUE EFECTIVAMENTE ES LA REPRESENTANTE LEGAL DE UNA INSTITUCION LEGALMENTE CONSTITUIDA DEBE PROBARLO, y si no posee el documento que acredite tal hecho por lo menos debe pedirlo a esta institución que lo requiera a donde corresponde. **EN CONCLUSION:** El señalamiento de impedimento a mi postulación como Magistrado a la Corte Suprema de Justicia DEBE DE SER RECHAZADO IN LIMINE POR NO ACOMPAÑAR MEDIO PROBATORIO ALGUNO CON EL CUAL PRETENDA ACREDITAR SU PRTENSION.

IV.- Aunque la Fundación Mack NO acredite el impedimento interpuesto en mi contra y en cumplimiento lo establecido en el artículo 126 de la ley antes civil nombrada, he de manifestar que lo aseverado por la mencionada fundación es totalmente falaz **toda vez que en ningún momento firmé RESOLUCION ALGUNA POR LA CUAL SE LE CAUSARA PERJUICIO TANTO A TERCERAS PERSONAS COMO A LA PROPIA ADMINISTRACION DE JUSTICIA**, ya que el documento que me fuera remitido a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que actualmente presido, **FUE UN PROYECTO DE RESOLUCION DE FECHA CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS**, es decir un documento que no había nacido a la vida jurídica ya que el mismo, no solamente, no estaba firmado o signado por la totalidad de los Magistrados que integraron el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que le dio origen al mencionado PROYECTO DE RESOLUCION, sino que tampoco estaba firmado por el propio SECRETARIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, es decir, nunca jamás se cometió falta alguna, sea de cualquier tipo de naturaleza, porque tal y como lo aseveré en el procedimiento disciplinario que al que oportunamente fui sometido y que dio origen a la formación del expediente número 789-2016 JDJ, para que una resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia naciera a la vida jurídica la misma debe de estar firmada por la totalidad de los Magistrados que conforman ese alto organismo del Estado y por el propio Secretario, tal y como lo ordena la Ley del Organismo Judicial en su artículo 143, que literalmente dice: **"Requisitos.** Toda resolución judicial llevará, necesariamente, el nombre del tribunal que la dicte, el lugar, la fecha, su contenido, la cita de leyes **y las firmas completas del juez, del magistrado o de los magistrados, en su caso, y el secretario, o sólo la de**

éste cuando esté legalmente autorizado para dictar providencias o decretos de puro trámite” (el resaltado es propio). Así también el artículo 108 de la mencionada ley establece: **Secretarios:** En cada uno de los tribunales habrá un secretario que autorice las resoluciones que se dicten y las diligencias que se practiquen; y además, el personal que requiera el servicio...” -----.

V.- El documento que oportunamente firmé y que es de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis y que le dio origen al proceso disciplinario antes mencionado, no es una resolución sino un proyecto de resolución que en ningún momento nació a la vida jurídica, por tanto NO se pudo tomar como un acto que constituya la comisión de una falta disciplinaria y por lo mismo jamás pudo ni siquiera generar duda de mi honorabilidad, no solamente en mi actuar como persona particular, sino en aquella en donde actúo como administrador de justicia, **además de que la citada resolución aparte de no nacer a la vida jurídica y por ende incapaz de surtir efectos legales que menoscabaran derechos y obligaciones de terceros, porque tal y como lo aseveré con anterioridad, lo que firmé fue un simple proyecto de resolución.**

VI.- Además quedó demostrado en el proceso disciplinario al que fui sometido como sujeto pasivo, que FUI INDUCIDO A ERROR PARA FIRMAR EL MENCIONADO PROYECTO POR PARTE DEL OFICIAL III DE LA VOCALIA IX DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, MARLON ANTONIO SANTOS FIGUEROA, quien fue la persona encargada de llevar y poner a disposición de mi persona el citado documento para que lo firmara, toda vez que debía, previo a llevar el documento para su firma, corroborar que persona o personas debían de firmar el citado documento para evitar precisamente inducir a error a los funcionarios que firmarían dicho documento, lo que fue debidamente informado

por la Licenciada Ana Patricia Lainfiesta Martínez, Supervisora Auxiliar de la Supervisión General de Tribunales, **EN EL INFORME QUE OPORTUNAMENTE PRESENTÓ, EL CUAL INDICA EN SUS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO LO SIGUIENTE: “c)...** A lo anterior se suma la declaración del oficial de vocalía Marlon Antonio Santos Figueroa, que al ser entrevistado claramente establece que al no encontrar al Magistrado Gustavo Dubón por la urgencia del caso rápidamente acudió a la Sala Tercera del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, y procedió a integrar con el magistrado Presidente de dicha Sala Jaime González Dávila; o sea que dicho oficial indujo a error al Magistrado González Dávila...”. De lo anterior se pudo establecer que mi actuar no fue negligente, pues debemos de entender a la negligencia como aquella omisión más o menos voluntaria pero consiente de poner la diligencia debida en los asuntos que se conocen y que tienen consecuencias jurídicas graves, lo que jamás ocurrió en mi caso, pues mi actuación fue producto de la negligencia del auxiliar judicial antes nombrado que me indujo a error y que nunca produjo alguna consecuencia jurídica pues en mi calidad de Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente, constantemente integraba los plenos de la Corte Suprema de Justicia y cuyas resoluciones no eran emitidas en ese momento, sino que se remitían días después a los despachos de los Magistrados que integraron dichos plenos para la firma respectiva, fue así como el día que firmé el citado documento, el mismo iba adjunto a todos los documentos pendientes de firma de plenos anteriores, **razón por la cual tanto el proceso disciplinario iniciado en mi contra fue declarado sin lugar, así como la acción de Antejuicio que el Ministerio Público y la Comisión Internacional**

contra la Impunidad en Guatemala, presentaron en mi contra y por consiguiente **EN NINGUN MOMENTO FUI SANCIONADO POR EL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, COMO POR ORGANO JURISDICCIONAL ALGUNO**, ya que el citado documento únicamente era un proyecto de resolución y por lo mismo al no estar firmado por la totalidad de los Magistrados que integraron el pleno que le dio origen a dicho documento ni por el propio Secretario de la Corte Suprema de Justicia, **jamás se le causó daño a la Administración de Justicia, ni a terceros que pudieran tener interés en el asunto.**

VII.- Como lo asevere con anterioridad la denunciante no presentan medio de prueba alguno con el cual acredite su pretensión, mas sin embargo con la prueba documental que acompaño y que consiste en certificación de la resolución emitida por el Consejo de la Carrera Judicial dentro del expediente número 20-2017 de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete por medio de la cual declaró **CON LUGAR EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR MI PERSONA CONTRA DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA JUNTA DE DISCIPLINA JUDICIAL EL SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE Y COMO CONSECUENCIA MODIFICÓ EL NUMERAL PRIMERO DE DICHA RESOLUCION, LA CUAL QUEDÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: "I. SIN LUGAR LA DENUNCIA PROMOVIDA EN CONTRA DEL ABOGADO JAIME AMILCAR GONZALEZ DAVILA, en su función de Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente, por las razones consideradas. III. SE REVOCAN los numerales IV y V de la resolución impugnada, por las razones consideradas..."**. **EN CONCLUSIÓN:** El hecho que le da origen al impedimento interpuesto en mi contra ya fue juzgado en más de una oportunidad, ya que si bien es cierto se dictó

por parte de la Junta de Disciplina Judicial resolución sancionatoria, la misma fue dejada sin efecto y sin validez legal alguna cuando el Consejo de la Carrera Judicial declaró con lugar el Recurso de Apelación que interpuse en contra de la resolución dictada por la citada Junta; Además tanto el Ministerio Público como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentaron en mi contra ante la Corte Suprema de Justicia con fundamento en el hecho que le dio origen a la denuncia administrativa antes relacionada, SOLICITUD DE ANTEJUICIO EN CONTRA DE MI PERSONA, **ACCION FUE RECHAZADA EN FORMA LIMINAR TAL Y COMO CONSTA EN LA RESOLUCION DE FECHA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS**, que acompaño al presente; por lo que en atención al Principio *non bis in idem*, al que hice referencia en el numeral romano I, de este memorial, LA DENUNCIA INTERPUESTA EN MI CONTRA NO SOLAMENTE DEBE SER RECHAZADA POR HABER SIDO JUZGADO EL HECHO EN QUE SE FUNDAMENTA LA MISMA EN MÁS DE UNA OPORTUNIDAD, sino también porque la entidad denunciante NI SIQUIERA ACREDITA LA REPRESENTACION CON QUE ACTÚA LA INTERPONENTE DEL SEÑALAMIENTO, ADEMÁS DE NO ACOPAÑAR MEDIO PROBATORIO ALGUNO CON EL CUAL PRETENDA ACREDITAR SU PRETENSION.

Por lo anteriormente expuesto propongo los siguientes medios de:

P R U E B A.

I.- Certificación emitida por la Coordinadora II del Archivo General de Tribunales de fecha veinticinco de octubre del año dos mil diecinueve que contiene la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia el veintiuno de noviembre del dos mil dieciséis, en la que resuelve **RECHAZAR IN LIMINE la solicitud de Antejuicio presentada en mi contra tanto por el Ministerio Publico como por**

la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, que acompaño al presente.

II.- Certificación de fecha veintinueve de octubre del año dos mil diecinueve emitida por La Secretaria Ejecutiva A.I. del Consejo de la Carrera Judicial de la República de Guatemala, que contiene la resolución dictada dentro del expediente CCJ NO. 20-2017. Ref. 789-2016 JDJ, por medio de la cual se resolvió declarar sin lugar la denuncia promovida en mi contra en mi función de Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que acompaño al presente.

III.- Presunciones legales y humanas.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Artículo 20 de la Ley de Comisiones de Postulación, el cual establece "...Las Comisiones verificarán la información que recaben, excluyendo la que no pueda ser confirmada, y notificarán al día siguiente al profesional, quien deberá ser escuchado dentro de un plazo de cinco días, con el objeto que presente sus pruebas de descargo si las tuviere."

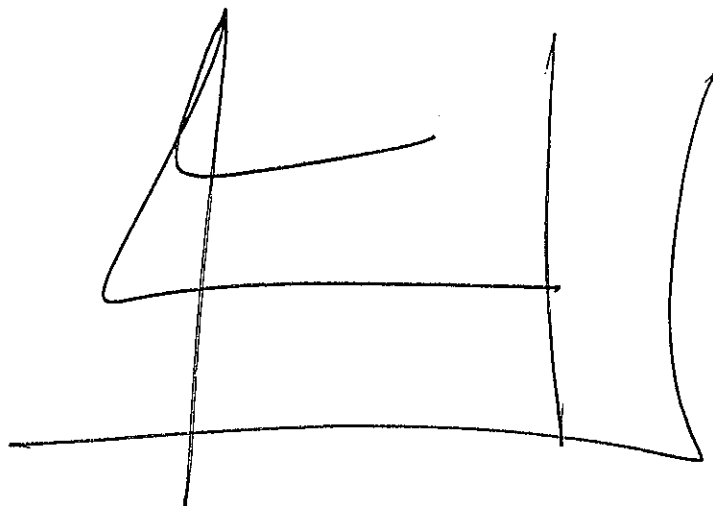
P E T I C I O N .

- 1.- Que se admita para su trámite el presente memorial y se agregue a sus antecedentes.
- 2.- Que en la forma expuesta se tenga por evacuada la audiencia conferida.
- 3.- Que se tengan por presentados los medios probatorios que se acompañan al presente memorial.
- 4.- Que al dictar la resolución que en derecho corresponde se RECHACE EN FORMA LIMINAR EL SEÑALAMIENTO INTERPUESTO EN MI CONTRA POR LA FUNDACION MYRNA MACK, POR HABER SIDO JUZGADO EN MAS DE UNA

OCASIÓN POR EL MISMO HECHO DENUNCIADO; o de lo contrario por no acreditar la entidad denunciante los hechos en que fundamenta su denuncia, o bien declarar sin lugar la denuncia interpuesta por la fundación antes mencionada y consecuentemente SE CONSIDERE A MI PERSONA COMO UNA PERSONA CON HONORABILIDAD, CAPACIDAD E IDONEIDAD, para ser incluido en el listado de candidatos que si cumplen con los requisitos para poder ser electo como MAGISTRADO DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Acompaño original y copia del presente memorial y documentos adjuntos, así también acompaño formato digital (PDF).

En la Ciudad de Guatemala, el 12 de Febrero del año 2020.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a horizontal line and a vertical line, with a large 'L' shape to the right.

Lic. Jaime Amilcar González Dávila
Magistrado Presidente
Sala Tercera de la Corte de Apelaciones
del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Guatemala, veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis. -----

I) Se integra con los Magistrados suscritos. II) Se tienen a la vista para resolver las diligencias de antejuicio promovidas por el **MINISTERIO PÚBLICO** a través del Agente Fiscal abogado **FÉLIX ENRIQUE ARIAS FLORES** y la **COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA**, a través de su mandataria judicial con representación abogada **ASTRID ODETE ESCOBEDO BARRONDO**, contra el abogado **JAIME AMÍLCAR GONZÁLEZ DÁVILA**, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE.

ANTECEDENTES

Señalan los denunciante que con fecha diez de octubre del presente año, el Ministerio Público conoció de la denuncia interpuesta por **MARÍA EUGENIA MORALES ACEÑA**, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia en la cual hace referencia a los siguientes hechos: el cinco de octubre de dos mil dieciséis se realizó la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Sesiones, ubicada en el tercer nivel del Palacio de Justicia. En el punto tres, durante la sesión los magistrados integrantes de la Cámara de Amparo y Antejuicios Nester Mauricio Vásquez Pimentel, Silvia Patricia Valdés Quezada y Vitalina Orellana y Orellana, sometieron a conocimiento del pleno diferentes expedientes de amparos y antejuicios. Dentro de los antejuicios, el entonces Presidente de la referida Cámara, presentó el antejuicio identificado con el número doscientos cincuenta y cinco guion dos mil dieciséis, promovido por el Ministerio Público a través de la agente fiscal Flor de María Samayoa Quiñónez, contra los diputados al Congreso

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



de la República de Guatemala ARISTIDES BALDOMERO CRESPO VILLEGAS, CHRISTIAN JAQUES BOUSSINOT NUILA, LUIS ARMANDO RABBÉ TEJADA, MANUEL MARCELINO GARCÍA CHUTÁ, CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GIRÓN y CÉSAR EMILIO FAJARDO MORALES, por hechos derivados de una denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas.

Al hacer referencia al antejuicio, la Magistrada Silvia Verónica García Molina se inhibió de conocer, por lo que se convocó a integrar al Magistrado de Sala de Apelaciones Gustavo Adolfo Dubón Gálvez y al Magistrado Freedyn Waldemar Fernández Ortiz que integró el pleno por ausencia del magistrado José Antonio Pineda Barales.

Expuso la Magistrada Morales Aceña que el Magistrado Nester Mauricio Vásquez Pimentel, se comprometió a recoger las firmas personalmente para evitar fuga de información y en virtud de los votos disidentes que era necesario razonar. Manifiesta la referida Magistrada que el diez de octubre de dos mil dieciséis le fue entregado en su despacho por su asistente, la resolución original señalada anteriormente, para efectos de proceder a firmar, pero al revisar el documento original se percató que aparece la firma del Magistrado Jaime Amilcar González Dávila, Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, quien no fue convocado, no se presentó y en ningún momento integró la Corte, no estudió el caso, no emitió su voto ante el Pleno de Magistrados, ni ante el Secretario de la Corte Suprema de Justicia, por lo que considera que existe una falsedad, razón por la cual, en cumplimiento de su función como servidora pública y ciudadana guatemalteca formuló la denuncia e hizo entrega a la fiscalía del Ministerio Público, de una carpeta color verde con la impresión en letras doradas donde se lee: "Corte



Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio. MSC Néstor Mauricio Vásquez Pimentel Magistrado Vocal XI", en cuyo interior se encuentra la resolución original que fue puesta a disposición para firma (de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis), dentro de las diligencias de antejuicio identificadas con el número doscientos cincuenta y cinco guion dos mil dieciséis que constan de cinco páginas, contenidas en tres folios. Indican las entidades denunciantes que en virtud de "haber plasmado su firma en la aludida, afirmó, dio firmeza y seguridad de algo, de lo que él no conoció, por lo que las mismas se constituyen falsas" (sic).

CONSIDERANDO I

El procedimiento de antejuicio es una garantía que preserva las funciones de la administración estatal, impidiendo que los funcionarios sean imputados por razones ilegítimas, políticas o espurias. La Corte de Constitucionalidad ha sostenido el criterio que previo a determinar la admisibilidad a trámite de un antejuicio, corresponde a la Corte Suprema de Justicia analizar si la denuncia reúne los requisitos básicos de admisibilidad, siendo estos: a) que el Ministerio Público o persona denunciante proporcionen, elementos de razonabilidad suficientes sustentados en una investigación seria y previa realizada; b) que al interponente de la denuncia o querella le consten directamente los hechos, salvo el caso de antejuicios directamente presentados por el Ministerio Público; y, c) que la denuncia o querella no se promueva por razones espurias, políticas o ilegítimas. (Expediente dos mil cuarenta guion dos mil tres (2040-2003), sentencia de fecha veinticinco de marzo de dos mil cuatro, expediente dos mil cuarenta y dos guion dos mil tres (2042-2003), sentencia de fecha tres de mayo de dos mil cuatro, expediente dos mil cuarenta y tres guion dos mil tres (2043-2003), sentencia de fecha veintidós de diciembre de dos mil tres, expediente seiscientos treinta y

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



cuatro guion dos mil cinco (634-2005), sentencia de fecha ocho de agosto del año dos mil cinco y expediente dos mil ciento diez guion dos mil seis (2110-2006), sentencia del uno de marzo del año dos mil siete).

CONSIDERANDO II

Del análisis del expediente de antejuicio, se advierte que el punto medular de la denuncia es el hecho que la resolución de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, dictada por la Corte Suprema de Justicia dentro de las diligencias de antejuicio número doscientos cincuenta y cinco guion dos mil dieciséis, fue firmada por el magistrado denunciado, quien, según indican los denunciantes no conoció de dicho expediente, no integró Corte ese día y tampoco estuvo presente en la sesión plenaria correspondiente. Al respecto, esta Corte determina que la resolución indicada aún no estaba totalmente firmada porque faltaban las firmas de la Magistrada Vocal Décimo Segundo María Eugenia Morales Aceña y del Secretario de la Corte Suprema de Justicia Rony Eulalio López Contreras, consecuentemente la misma no nació a la vida jurídica, no era una resolución perfecta, siendo que para que tuviera validez debió ser firmada por la totalidad de los magistrados y autorizada por el Secretario de conformidad con el artículo 143 de la Ley del Organismo Judicial, que establece: *"Toda resolución judicial llevará, necesariamente, el nombre del tribunal que la dicte, el lugar, la fecha, su contenido, la cita de leyes y las firmas completas del juez, del magistrado o de los magistrados, en su caso y del secretario (...)"*, en el mismo sentido, el artículo 108 del citado cuerpo legal estipula: *"En cada uno de los Tribunales de justicia habrá un secretario que autorice las resoluciones que se dicten y las diligencias que se practiquen (...)"*.

Siendo que la resolución del cinco de octubre de dos mil dieciséis, tampoco fue notificada, por lo tanto no causó efectos ni consecuencias jurídicas a las partes, de



manera que no se puede establecer la existencia de indicios racionales que orienten a pensar que la actitud del funcionario denunciado, podría revestir características propias de ilícitos penales.

Dentro del anterior contexto, es oportuno traer a cuenta que para admitir a trámite un antejuicio deben existir, suficientes indicios que sustenten la posibilidad de que el denunciado pudo incurrir en actos que probablemente revisten las características de uno o varios ilícitos. Ante la inexistencia de esos indicios, esta Corte concluye que la denuncia fue presentada por motivos espurios e ilegítimos, lo que trae como consecuencia su rechazo *in limine*.

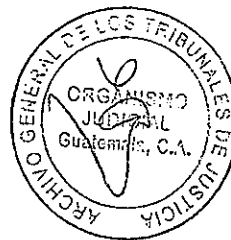
LEYES APLICABLES

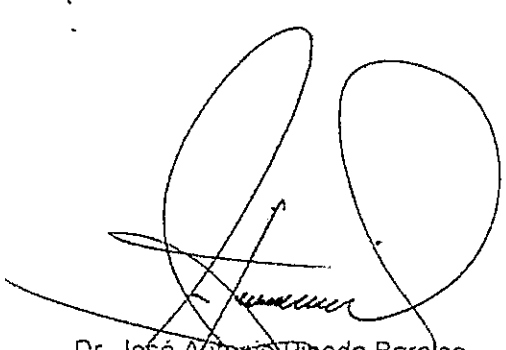
Artículos citados y: 1, 2, 12, 175, 203, 204 y 214 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 3, 7, 9, 10, 11, 11 Bis y 20 del Código Procesal Penal; 1, 3, 4, 12, y 14 de la Ley en Materia de Antejuicio; 16, 23, 51, 75, 77, 141 y 143 de la Ley del Organismo Judicial.


POR TANTO

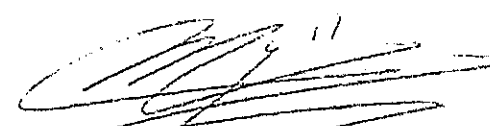
La Corte Suprema de Justicia, con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver declara: I) Rechazar *in limine* la solicitud de antejuicio promovida por el MINISTERIO PÚBLICO a través de su Agente Fiscal abogado FÉLIX ENRIQUE ARIAS FLORES y la COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA, a través de su mandataria judicial con representación abogada ASTRID ODETE ESCOBEDO BARRONDO contra el abogado JAIME AMÍLCAR GONZÁLEZ DÁVILA, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE. II) Notifíquese.

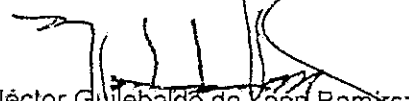
PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA






Dr. José Antonio Pineda Barajas
Magistrado Presidente del Organismo Judicial y
de la Corte Suprema de Justicia (en funciones)



Lic. Ronald Manuel Colindres Roca
Magistrado Presidente
Sala Primera de la Corte de Apelaciones
del Ramo Civil y Mercantil

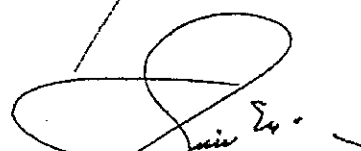

Licda. María de la Luz Gómez Mejía
Magistrada Presidenta
Sala Tercera de la Corte de Apelaciones
Ramo Civil y Mercantil


Lic. Néctor Guilebaldo de León Ramírez
Magistrado Presidente
Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del
Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente


Lic. César Augusto Avila Aparicio
Magistrado Presidente
Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Chiquimula


Lic. Noé Adalberto Ventura Loyo
Magistrado Presidente
Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, de
Delitos de Femicidio y Otras formas de Violencia
contra la Mujer y Violencia Sexual


Lic. Urias Eliazar Bautista Orozco
Magistrado Presidente
Sala Regional Mixta de la Corte de
Apelaciones de Jalapa


Licda. Greta Antivia Monzón Espinoza
Magistrada Presidenta
Sala Regional Mixta de la Corte de
Apelaciones de la Antigua Guatemala



Licda. Flor de María Gálvez Barrios
Magistrada Presidente de la Sala Primera de la
Corte de Apelaciones de Familia

Lic. César Augusto López López,
Magistrado Presidente de la Sala Quinta de la
Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social

Lic. Domingo Ulban Ejeardo
Magistrado Presidente
Sala Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Lic. Guillermo Demetrio España Mérida
Magistrado Presidente
Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
GUATEMALA, C.A.

Licda. Juana Solís Rosales
Magistrada Presidente
Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Licda. Cecilia Odette Mescoso Arriaza de Salazar
Secretaria de la Corte Suprema de Justicia (en funciones)

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



GUATEMALA, C.A.

**LA INFRASCRITA COORDINADORA II DEL ARCHIVO GENERAL DE
TRIBUNALES**-----

-----**CERTIFICA:**-----

Que tuvo a la vista el **ANTEJUICIO** identificado con el número **CUATROCIENTOS GUION DOS MIL DIECISEIS** de la **CAMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**. En el cual figuran como interponente: **MINISTERIO PUBLICO Y COMISION INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA** en contra de: **MAGISTRADO PRESIDENTE JAIME AMILCAR GONZALEZ DAVILA DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE**. Que las fotocopias que anteceden fueron reproducidas de su original el día de hoy en mí presencia, las cuales contienen: **I).** Reproducción de los folios setenta y cinco (75) al setenta y ocho (78) del expediente arriba identificado. Y para los usos legales que al Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente: **JAIME AMILCAR GONZALEZ DAVILA** convengan, extendiendo, numero, sello y firmo la presente certificación, compulsada en **SIETE** hojas de papel especial para fotocopias únicamente en su lado anverso, más la presente hojas oficio de papel bond, la cual tiene impreso el membrete del Organismo Judicial. Guatemala, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve.-



CDA. CARMEN LUCIA NAJARRO RUANO
COORDINADORA II
ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES



GUATEMALA, C.A.

NÚMERO 400-2016 - CAMARA DE AMPARO Y ANTEJUICIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-----

ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES. Guatemala, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. **I).** Se admite para su trámite la solicitud que antecede y documento adjunto, agréguese a sus antecedentes. **II).** Resolviendo en definitiva a costa del interesado y con las formalidades de ley, extiéndase la certificación solicitada del proceso arriba identificado.

Artículos: 14, 28, 29, 30 y 31 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 141, 142, 143 y del 171 al 177 de la Ley del Organismo Judicial




LICDA. CARMEN LUCÍA NAJARRO RUANO
COORDINADORA II
ARCHIVO GENERAL DE TRIBUNALES

En esta fecha recibí conforme la resolución que antecede y la certificación solicitada.-----

Guatemala, _____ de _____ de 2019. HORA: _____

FIRMA: _____ NOMBRE: _____

DPI: _____ EXTENDIDA EN: _____

Consejo de la Carrera Judicial

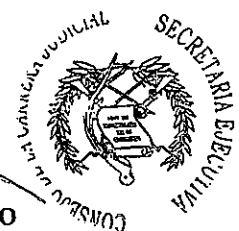
LA INFRASCRITA SECRETARIA EJECUTIVA A.I. DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.-----

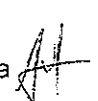
Certifica:

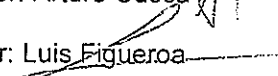
Que las ocho hojas de papel fotocopia que anteceden, las primeras siete impresas en su anverso y reverso y la octava únicamente en su lado anverso que reproducen fielmente la resolución fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, correspondiente al expediente CCJ - veinte guión dos mil diecisiete del Consejo de la Carrera Judicial, referencia JDJ setecientos ochenta y nueve guión dos mil dieciséis de la Junta de Disciplina Judicial, (CCJ-20-2017 ref. 789-2016 JDJ), apelación promovido por el abogado Jaime Amilcar González Dávila, Magistrado Presidente de Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala.-----

Y para entregar al abogado Jaime Amilcar González Dávila, extendiendo, numero, sello y firma la presente, en nueve hojas, las primeras ocho hojas de fotocopia y la presente hoja de papel simple con membrete del Consejo de la Carrera Judicial; en la ciudad de Guatemala, el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve.-----


Licda. Evelyn Jeannette Hernández Castillo
Secretaria Ejecutiva a.i. del Consejo de la Carrera Judicial

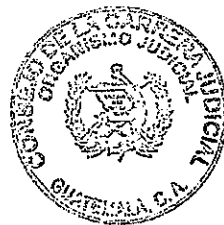


Elaborado por: Arturo Cusca 

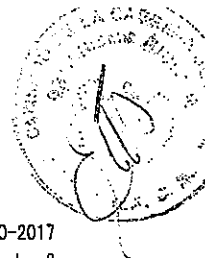
Revisado por: Luis Figueroa 



GUATEMALA, C.A.



20-2017
1 de 8



Consejo de la Carrera Judicial

EXPEDIENTE 20-2017. CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL. Guatemala, veintinueve de mayo de dos mil diecisiete.-----

I. Con base en la Opinión Consultiva de la Corte de Constitucionalidad de fecha nueve de enero de dos mil diecisiete, emitida dentro del expediente cinco mil novecientos once guion dos mil dieciséis (5911-2016) y el artículo 74 del Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Carrera Judicial, se procede a dictar la presente resolución. II. En apelación y con sus antecedentes se examina la resolución emitida por la Junta de Disciplina Judicial de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, contenida en folios del seiscientos setenta y uno al seiscientos ochenta y siete del expediente disciplinario número setecientos ochenta y nueve guion dos mil dieciséis (789-2016), que en su parte conducente literalmente indica: "POR TANTO: Esta JUNTA DE DISCIPLINA JUDICIAL, con fundamento en lo considerado y leyes citadas, al resolver por unanimidad, DECLARA: I) CON LUGAR la denuncia promovida en contra del abogado JAIME AMILCAR GONZÁLEZ DÁVILA, en su calidad de Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, como consecuencia por una falta leve estipulada en el artículo 39 literal d) de la Ley de la Carrera Judicial, se le impone de conformidad con el artículo 42 de la misma ley literal "a", la sanción de una AMONESTACIÓN ESCRITA. II) SIN LUGAR la denuncia promovida en contra de la abogada MARIA EUGENCIA MORALES ACEÑA DE SIERRA, en su calidad de Magistrada Vocal Decimo Segunda de la Corte Suprema de Justicia. III) EXHORTAR al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que con auxilio de la Unidad Administrativa que consideren pertinente establezcan reglas claras y precisas a efecto de unificar el trabajo administrativo que cada uno de los Magistrados realiza en sus propias Cámaras y que es integrado al Pleno, a efecto de evitar retrasos y descuidos, en perjuicio de la seguridad jurídica y dar cumplimiento a lo prescrito en la Ley del Organismo Judicial y

Reglamento General de Tribunales. IV) Al quedar firme el presente fallo, el mismo debe ser ejecutado. V) En su oportunidad procesal, certifíquese al Consejo de la Carrera Judicial, para que haga efectiva la anotación respectiva y oportunamente archívense las actuaciones; VI) notifíquese." -----

ANTECEDENTES:

DEL HECHO QUE ATRIBUYE LA SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES:

"Porque usted abogado Jaime Amílcar Gózaes Dávila, en su calidad de Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramos Penal, narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, incurrió en negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo, al suscribir la resolución de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, dictada dentro de las diligencias de antejuicio número doscientos cincuenta y cinco guión dos mil dieciséis (255-2016) ya que no tuvo participación en el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en la deliberación y aprobación de dicha resolución por lo que incurrió en la falta leve prevista en el artículo 39 literal d) de la ley de la Carrera Judicial. II) "A) "Porque usted abogada María Eugenia Morales Aceña de Sierra, en su calidad de Magistrada Vocal Décimo Segunda de la Corte Suprema de Justicia incurrió en atraso y descuido injustificado en el trámite y resolución final de las diligencias de antejuicio número doscientos cincuenta y cinco guión dos mil dieciséis, ya que el día diez de octubre de dos mil dieciséis, le fue entregado dicho expediente para que suscribiera la resolución final de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, pero en lugar de suscribirla la remitió a la Fiscalía contra la Impunidad del Ministerio Público, por lo que se hizo necesario pedir su devolución y fue hasta el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, conociera nuevamente dicha resolución y le diera validez. Por lo que su conducta encuadra en la falta grave prevista en el artículo 40 literal b) de la Ley de la Carrera Judicial, Decreto 41-99 del Congreso de la República; B) Porque usted Abogada María Eugenia Morales Aceña de Sierra en su calidad de Magistrada Vocal Décimo Segunda de la Corte



Consejo de la Carrera Judicial

Suprema de Justicia incurrió en negligencia en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo, ya que desde el diez de octubre de dos mil dieciséis, sustrajo del expediente de diligencias de Antejuicio número doscientos cincuenta y cinco guión dos mil dieciséis, el original de la resolución de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis y lo remitió a la Fiscalía Contra la Impunidad del Ministerio Público, inobservando lo estipulado en el artículo 171 de la Ley del Organismo Judicial. Por lo que su conducta encuadra en la falta leve prevista en el artículo 39 literal d) de la Ley de la Carrera Judicial, Decreto 41-99 del Congreso de la República" -----

CONSIDERANDO I

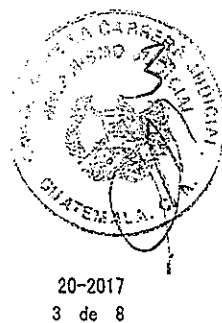
DE LA PROCEDENCIA DEL ANÁLISIS DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO. De conformidad con el artículo 51 del decreto 41-99 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Carrera Judicial, contra las resoluciones de la Junta de Disciplina Judicial, se podrá interponer recurso de apelación ante el Consejo de la Carrera Judicial dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación; en el presente caso el recurso de apelación fue presentado en tiempo; así mismo, se establece que la resolución impugnada es de carácter definitivo, pues pone fin al proceso disciplinario, por lo que se cumple con lo establecido en el artículo 19 literal n) del Reglamento General de la Ley de la Carrera Judicial (Decreto 41-99), y de conformidad con el artículo 74 del Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Carrera Judicial, es procedente efectuar su análisis legal.-----

CONSIDERANDO II

DE LO EXPUESTO POR LAS PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCESO DISCIPLINARIO.-----

LA SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES, AL EVACUAR LA AUDIENCIA CONFERIDA MANIFESTÓ: "La razón de esta gestión es EVACUAR LA AUDIENCIA que

se confiere a la Supervisión General de Tribunales, con relación al recurso de apelación que se interpusiera en contra de la resolución de fecha 06 de marzo de 2017, proferida por la Junta de Disciplina Judicial dentro del expediente administrativo disciplinario número 789-2016 JDJ, para lo cual REITERO los conceptos vertidos en memorial de fecha 17 de marzo de 2017, pues como se indicó en el mismo, mi representada difiere de lo resuelto con relación a la Magistrada Morales Aceña de Sierra, porque en la parte considerativa del fallo literalmente se expresa que: Quedó acreditado que en su calidad de Magistrada Vocal Décimo Segunda de la Corte Suprema de Justicia le fue entregada el día diez de octubre de dos mil dieciséis, para que suscribiera, la resolución final de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente a las diligencias de antejuicio número doscientos cincuenta y cinco guión dos mil dieciséis, pero contrario a suscribirla la remitió a la Fiscalía Contra la Impunidad del Ministerio Público en esa misma fecha, para fundamentar la denuncia presentada en virtud que fue suscrita por el Abogado Jaime Amílcar González Dávila, Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, quien no participó en la discusión y aprobación de la misma. Tal razonamiento era suficiente para declarar con lugar la denuncia, toda vez que la Propia Junta de Disciplina Judicial consideró que el hecho imputado quedó debidamente probado. Sin embargo, en forma contradictoria y sin fundamento legal valedero declara sin lugar la denuncia formulada en contra de la funcionaria judicial denunciada, expresando que: "...lo anteriormente acreditado de conformidad con las pruebas ya valoradas no se considera por parte de los integrantes de esta Junta de Disciplina Judicial, que revista características de una o varias faltas administrativas ...", porque en atención a lo dispuesto por el artículo 298 del Código Procesal Penal, "... existe una obligación inexcusable de forma genérica para los empleados y funcionarios públicos de denunciar ante las autoridades señaladas en el artículo anterior el conocimiento que tengan de la comisión de un hecho que podría ser calificado como delito,



20-2017
3 de 8

Consejo de la Carrera Judicial

incluso dicha omisión se encuentra tipificada como delito omisión de denuncia, el cual se desarrolla en el artículo 457 del Código Penal ... ". Con relación a ello, esta Supervisión estima procedente que la funcionaria judicial denunciada haya hecho del conocimiento del Ministerio Público el hecho en que incurrió el señor Magistrado, pero no en la forma como lo hizo, pues lo procedente hubiese sido acompañar como evidencia a la denuncia, una fotocopia simple o una certificación del documento original que contenía la resolución final de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente a las diligencias de antejuicio número doscientos cincuenta y cinco guión dos mil dieciséis, pero no sustraer del expediente el original de la resolución y remitirlo a la Fiscalía contra la Impunidad del Ministerio Público, pues con ello contravino lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley del Organismo Judicial, que establece que los expedientes de las actuaciones que practiquen los tribunales no deben salir de la oficina, pudiendo darse a quienes lo soliciten, fotocopias simples o certificaciones, exceptuando de esta regla únicamente los procesos fenecidos que, con fines docentes soliciten las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, excepción que no se da en el caso que nos ocupa. Con base en lo anterior se evidencia la procedencia del recurso de apelación interpuesto únicamente en contra de lo resulto en el numeral II) de la resolución final que se impugnó, que declara sin lugar la denuncia promovida en contra de la Abogada María Eugenia Morales Aceña de Sierra, en su calidad de Magistrada Vocal Décimo Segunda de la Corte Suprema de Justicia."

LA PARTE DENUNCIADA, ABOGADO JAIME AMILCAR GONZÁLEZ DAVILA, AL EVACUAR LA AUDIENCIA CONFERIDA MANIFESTÓ: "La Junta de Disciplina Judicial, para sostener la decisión ahora impugnada, se fundamenta en la declaración del testigo Marlon Antonio Santos Figueroa y en la resolución de la Corte Suprema de Justicia que repone la resolución que fue firmada, entre otros, por mi persona, porque la misma fue enviada en original al Ministerio Público; asimismo, con el expediente de antejuicio que

incluye la resolución que contiene mi firma en donde se dice no participé en el pleno de la Corte. Lo anteriormente descrito, señores del Consejo, pone en evidencia que la Junta para resolver el presente caso no observó la recta y correcta aplicación de la sana crítica razonada al momento de valorar la prueba; en efecto, en relación a la prueba que dice la Junta que sirvió de base para sancionarme, he de señalar que la misma bajo ninguna circunstancia demuestra la comisión de la falta señalada, toda vez que la declaración prestada por el testigo pone de manifiesto que él únicamente estaba recolectando firmas para lo que sería una resolución y al momento en que se hizo la denuncia y se repusieron actuaciones, la misma jamás había nacido a la vida jurídica ni había causado efectos negativos contra ninguna persona o a la administración de justicia, razón por la cual, jamás podía sancionárseme, evidenciándose únicamente los yerros en que la propia Corte Suprema de Justicia incurre en la tramitación de sus asuntos, por lo que esa declaración jamás podía utilizarse en mi perjuicio, dados los efectos que jamás produjo el proyecto de resolución que se firmó. El expediente de antejuicio donde aparece mi firma, tampoco podía valorarse en mi perjuicio, toda vez que, como ya se dijo, la resolución o proyecto de resolución, jamás nació a la vida jurídica, quedándose ello, simplemente en nada, porque esa resolución además, se repuso por otra que fue la que finalmente produjo sus efectos legales correspondientes y, fuera de ello, no existe otro medio de prueba que la Junta haya tenido para resolver como lo hizo, por tanto, no existe medio de prueba que demuestre la comisión de la falta por la que se me sancionó. La Junta de Disciplina Judicial, para resolver, obvió que conforme los artículos 214 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 75 de la Ley del Organismo Judicial, la Corte Suprema de Justicia se integra por trece magistrados y que una resolución para que surta todos sus efectos, debe conforme los artículos 108 y 143 de la Ley del Organismo Judicial, estar firmada por la totalidad de los magistrados y del secretario; en el caso concreto, lo que la Junta llama resolución firmada por mi persona (y que para mí es un proyecto de resolución), jamás fue firmada por la



Consejo de la Carrera Judicial

totalidad de los magistrados, como tampoco por el Secretario de la Corte, razón por la cual, jamás nació a la vida jurídica y, por ende, no podía ocasionar ningún daño a persona alguna o a la administración de justicia que son precisamente los efectos que se requieren, conforme el último párrafo del artículo 35 del Reglamento General de la Ley de la Carrera Judicial Decreto 41-99 del Congreso de la República de Guatemala, para sancionarme, lo cual, no sólo no fue ni siquiera mencionado, menos demostrado por los medios legales correspondientes, es más, existe como prueba dentro del procedimiento disciplinario la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que claramente decidió no admitir a trámite un antejuicio promovido en mi contra derivado de los mismos hechos ahora analizados, precisamente, porque eso que se llama resolución, jamás fue firmada por todos los ya mencionados y porque nunca tuvo vida jurídica, de manera que para lo penal no existe ilícito y para lo administrativo si existe responsabilidad disciplinaria, no obstante que para ambos casos, la resolución que para mí es un proyecto, jamás nació a la vida jurídica y, con ello, se advierte inseguridad jurídica. Otro aspecto relevante no analizado dentro de la sana crítica razonada por la Junta, lo es que en eso que se llama resolución firmada por mi persona aparecen varias firmas ilegibles sin sellos de magistrados y se desconoce de quienes podrían ser esas firmas y sobre las que junto con la que aparece de mi persona no existe peritaje que demuestre que las anteriores firmas eran de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de Salas de Corte de Apelaciones u otros Tribunales de igual categoría que hubiesen firmado y, ello, lo que pone en evidencia es que la Junta de Disciplina Judicial por no aplicar correctamente la sana crítica razonada, obvió también, evaluar el contexto en que se produjo al firma de ese proyecto resolución, lo cual, era esencial, pues ese es el objeto de aplicar esa valoración para no caer en arbitrariedad en la decisión que se adopte que es precisamente lo que sucedió en el presente caso. Finalmente, se no se aprecia en la resolución ahora impugnada, ese claro razonamiento sobre los puntos vertidos y expuestos

precedentemente que, además, fueron invocados dentro las etapas procedimentales de la audiencia señalada oportunamente, careciendo de esa ausencia de razonamiento, que limita e impide mi legítimo derecho de defensa y a la tutela efectiva, ello, amerita que mi apelación sea declarada con lugar, en consecuencia se revoque la decisión asumida, se declare sin lugar la denuncia y se ordene el archivo de las actuaciones." -----

LA OTRA PARTE DENUNCIADA, ABOGADA MARÍA EUGENIA MORALES ACEÑA,
AL EVACUAR LA AUDIENCIA CONFERIDA MANIFESTÓ: "La honorable Junta de Disciplina Judicial dictó resolución con fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, la cual en su numeral romano II) declaró sin lugar la denuncia promovida en mi contra; sin embargo, la Supervisión General de Tribunales por medio de la Supervisora de Tribunales Irma del Rosario Castro Juárez, presentó recurso de apelación en contra de dicha resolución en su numeral antes descrito, aceptando de manera tácita el resto del contenido de la resolución y aceptando asimismo que en ningún momento existió negligencia en mi actuar. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE TORNAN INVIABLE LOS ARGUMENTOS DE APELACIÓN PRESENTADOS POR LA SUPERVISIÓN GENERAL DE TRIBUNALES Y QUE POSIBILITAN SE CONFIRME LA RESOLUCIÓN QUE SEIMPUGNA DICTADA A MI FAVOR. En cuanto a lo argumentado por la Supervisión General de Tribunales, me permito indicar que, tal como lo indiqué en la audiencia oral y pública que se celebró el día veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, es importante indicar que, la promoción de una denuncia es obligatoria de conformidad con lo establecido en el artículo 298 del Código Procesal Penal, por lo que, era mi deber acompañarle los elementos de prueba en los que apoyé la misma, tal como lo establece el artículo 299 de esa ley procesal penal, razón por la cual, no se produjo retraso injustificado alguno que se me pretendiera endilgar, debido a que, la remisión de la citada resolución al ente investigador, deriva de la obligación legal antes indicada, ello para demostrar con base en la denuncia que oportunamente presenté, que se produjo un ilícito en una resolución o documento público de esa naturaleza,



Consejo de la Carrera Judicial

específicamente, por haberla firmado un magistrado suplente, quien nunca integró el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para analizar y resolver en cuanto a esas diligencias de antejuicio específicas y que se individualizó en autos. De ahí que, desde ninguna perspectiva legal, el hecho que una resolución esté en poder del Ministerio Público, derivado de una denuncia a la cual se le adjuntó esa resolución, como un elemento esencial de prueba, no implica de mi parte retraso judicial injustificado alguno en cuanto a la imputación que se me hace, pues al estar en poder del ente investigador dicha resolución, le permitirá a dicho ente, que éste, examine los motivos en los que se fundamentó la denuncia, así como realizar cualquier peritaje que fuera necesario sobre el documento original y no sobre fotocopia o copia certificada como desacertadamente lo indica la supervisión apelante, para así, determinar la existencia eventual de algún ilícito. Por lo anterior, demuestro que mi conducta no constituye la falta grave que se me endilga en la queja tramitada en mi contra, sino por el contrario, sólo demuestro que he actuado apegada a la Constitución y a la ley. Sumado a lo anterior, nunca tuve en mi poder la totalidad de las actuaciones que constituyen el expediente sino únicamente la resolución que entregué con la denuncia que interpusé ante el Ministerio Público el mismo día en la que la recibí, por las razones antes apuntadas. Por eso es que en el documento anteriormente indicado, identifiqué un posible abuso del poder público, encargado a jueces con lo cual se violenta la norma en perjuicio del interés general y el interés público, además era posible que se hubiese cometido abuso del cargo por acciones u omisiones en el ejercicio de la función pública, dado a que hubo ocultamiento o violación de la confianza encargada por la Constitución Política de la República a un funcionario depositario del poder público, lo que conlleva a que, haber firmado la resolución sin haber intervenido en la sesión ordinaria del pleno de la Corte Suprema de Justicia del cinco de octubre de dos mil dieciséis, constituyo un acto intencional que da como resultado una representación errónea de lo realmente ocurrido. La Supervisión

del

General de Tribunales al momento de interponer su recurso de apelación extrae pasajes aislados de la resolución impugnada lo cual hace incurrir en error, puesto que al momento de hacer un análisis integral de la misma, toda vez que la Junta de Disciplina Judicial consideró que: " esta Junta de Disciplina Judicial, tiene claro que no se puede extraer o sacar de cualquier forma una actuación de los tribunales, considerando también que toda obligación en determinado momento y bajo determinadas circunstancias puede tener una excepción, ya que tal como sucedió en el presente caso en donde la Magistrada denunciada para fundamentar su denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (...) siendo además, la prueba más importante en ese momento por la denuncia presentada, y por las circunstancias y estructura en que se encuentra la corte suprema de Justicia ... ": por lo que ha quedado plenamente demostrado que la remisión de dicha resolución fue en cumplimiento a la obligación de presentar denuncia. Con base a lo anteriormente indicado SOLICITO que al resolver se declare SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la Supervisión General de Tribunales.-----

CONSIDERANDO III

El Consejo de la Carrera Judicial, al realizar el análisis de la resolución emitida por la Junta de Disciplina Judicial de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, contenida en los folios del seiscientos setenta y uno al seiscientos ochenta y siete del expediente disciplinario, así como del análisis y estudio de las actuaciones procesales determina que: I) En cuanto al abogado Jaime Amílcar González Dávila, se determina que con su actuar no incurrió en falta disciplinaria, debido a que el documento signado por su persona era únicamente un proyecto de resolución de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, dentro de las diligencias de antejuicio número doscientos cincuenta y cinco guión dos mil dieciséis (255-2016), toda vez que el artículo 143 de la Ley del Organismo Judicial establece: *"Requisitos. Toda resolución judicial llevará, necesariamente, el nombre del tribunal que la dicte, el lugar, la fecha, su contenido, la cita de leyes y las firmas completas del juez, del magistrado o de los*



GUATEMALA, C.A.



20-2017
6 de 8

Consejo de la Carrera Judicial

magistrados, en su caso, y del secretario, o sólo la de éste cuando esté legalmente autorizado para dictar providencias o decretos de puro trámite." (el resaltado es propio) y por su parte el artículo 108 de dicha ley establece: "Artículo 108. Secretarios. En cada uno de los Tribunales de justicia habrá un secretario que autorice las resoluciones que se dicten y las diligencias que se practiquen; y además, el personal que requiera el servicio..."; en ese sentido, este Consejo puede establecer que el documento que firmó el funcionario denunciado, cuya fotocopia obra en folio veintiséis al veintiocho del expediente disciplinario, no es una resolución sino un proyecto de resolución que en ningún momento nació a la vida jurídica y por tanto no puede tomarse como un acto que constituya comisión de falta disciplinaria, toda vez que no llena los requisitos descritos en los artículos citados, misma que por su naturaleza y temporalidad no nació a la vida jurídica y por ende incapaz de surtir efectos legales que menoscabaran derechos y obligaciones, lo anterior se confirma con el hecho de que el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, fue emitida la resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia, cuya fotocopia obra en folio seiscientos veintiocho al seiscientos treinta del expediente disciplinario, la cual se encuentra debidamente autorizada y que por tanto sí surtió los efectos legales y que corresponde, en cuanto a su contenido, al proyecto de resolución que en su momento firmara el abogado Jaime Amílcar González Dávila. De otra parte, este Consejo determina que el funcionario judicial denunciado fue inducido a error por parte del oficial Marlon Antonio Santos Figueroa, quien fue el encargado de llevar y poner a disposición del funcionario denunciado el documento para su firma, toda vez que debía, previo a llevar el documento para su firma, corroborar quién debía firmar el documento referido, para evitar precisamente inducir a error a los funcionarios que firmaran dicho documento, lo cual fue manifestado en el informe de investigación de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, el cual obra en folio ochenta y uno del expediente disciplinario, al indicar en las consideraciones de hecho y de derecho lo

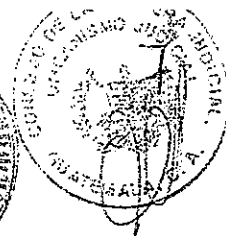
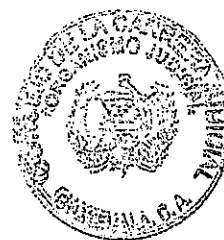
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

siguiente: "... o sea que dicho oficial indujo a error al Magistrado González Dávila." (Refiriéndose al señor Marlon Antonio Santos Figueroa), lo cual fue confirmado con la declaración testimonial que dicho oficial prestara en la audiencia de mérito ante la Junta de Disciplina Judicial, en donde expresó al ser preguntado "...k) ¿Entonces cómo es que aparece el Licenciado Jaime Amílcar integrando en esa resolución si nadie dio una instrucción que el integrara? Respondió: "repito por la urgencia del caso acudí primeramente a la Sala Primera para integrar quien efectivamente me integró, y acudí a la Sala Segunda pero en ese momento no se encontraba el Magistrado titular, y no me dieron indicaciones a qué hora regresaba, y por la urgencia del caso, procedí a la Sala Tercera quien el Licenciado Amílcar, amablemente nos integró"; l) ¿O sea que usted fue a una Sala y no encontró al Magistrado quien iba a firmar y como no lo encontró se fue a la Sala donde estaba el Licenciado Jaime para integrar? Respondió: "así es"; (...) ñ) ¿Podría decirse con lo que usted indicó que fue usted el que decidió ir a esa Sala a obtener la firma del Magistrado porque no estaba el Magistrado que le correspondía firmar? Respondió: "si, como trabajo cotidiano, con integración de firmas siempre tratamos de integrar con los Magistrados que nos colaboran". En ese sentido, se establece que el actuar del abogado Jaime Amílcar González Dávila no es constitutivo de falta, pues no puede encuadrarse como negligencia, pues ésta debe de entenderse como aquella omisión más o menos voluntaria pero consciente de poner la diligencia debida en los asuntos que conoce y que tiene consecuencias jurídicas graves, lo cual como ya se estableció, no ocurre en el presente caso, pues el funcionario actuó como producto de la negligencia del auxiliar judicial que lo indujo a error y que no produjo ninguna consecuencia jurídica, pues del documento firmado no nació a la vida jurídica, tal como se indicó, contrario a lo que manifiesta la Honorable Junta de Disciplina al indicar que para sancionar al abogado Jaime Amílcar González Dávila, lo hizo: "...tomando en consideración las circunstancias en que se cometió el hecho ya descritas, así como la gravedad del daño causado..."; por lo anterior el actuar del funcionario judicial denunciado no encuadra dentro de ninguna de las faltas que señala la Ley de la Carrera Judicial, por lo tanto debe revocarse



20-2017
7 de 8

Consejo de la Carrera Judicial

parcialmente la resolución apelada dejando sin efecto los numerales I de la parte resolutive de dicha resolución, y modificando la resolución apelada, en el sentido de declarar sin lugar la denuncia presentada en contra del abogado Jaime Amílcar González Dávila, en su calidad de Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, por lo considerado. II) Con relación a los señalamientos de la Supervisión General de Tribunales contra la abogada María Eugenia Morales Aceña de Sierra, este Consejo al realizar el análisis que corresponde, determina que el actuar de la Magistrada Morales Aceña, fue acertado al denunciar un acto que por su naturaleza era su deber denunciar, ante la posibilidad de que se tratara de un ilícito penal, según lo estipulan los artículos 297 y 298 del Código Procesal Penal, de tal manera que la Magistrada denunciada, para fundamentar su denuncia ante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, optó por presentar como evidencia, el objeto del hecho denunciado en el presente proceso disciplinario, consistente en el proyecto de resolución final de fecha cinco de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente a las diligencias de antejuicio número doscientos cincuenta y cinco guión dos mil dieciséis (255-2016), lo cual a criterio de este Consejo, realizó en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo como funcionaria pública, pues ante la posible comisión de un ilícito penal, la funcionaria judicial denunciada tenía la obligación de presentar la denuncia correspondiente, para que fuera en ente investigador quien determinara lo relacionado a la existencia de un posible delito, tal como lo establece el artículo 457 del Código Penal *"Artículo 457. El funcionario o empleado público que, por razón de su cargo, tuviere conocimiento de la comisión de un hecho calificado como delito de acción pública y, a sabiendas, omitiere a retardare hacer la correspondiente denuncia a la autoridad judicial competente, será sancionado con multa de cien a un mil quetzales."*; así mismo, se determina que en el presente caso, no existe un atraso injustificado por parte de la Magistrada Morales Aceña, pues en primer lugar, tal como lo indica la funcionaria

denunciada en el memorial de evacuación de audiencia, no recibió la totalidad de las actuaciones del antejuicio doscientos cincuenta y cinco guión dos mil dieciséis (255-2016), sino únicamente el proyecto de resolución, el cual fue remitido al Ministerio Público conforme a lo ya considerado, por lo que de haberse producido un atraso, éste tenía su justificación en que el mismo se derivó del cumplimiento de una obligación en el ejercicio del cargo, como lo es la obligación de denunciar un posible ilícito penal. De lo anterior se determina que la Magistrada María Eugenia Morales Aceña actuó en cumplimiento de sus funciones, pues de no hacerlo, hubiera incurrido en responsabilidad, por lo que el recurso de apelación presentado por la Supervisión General de Tribunales es improcedente y por tanto debe declararse sin lugar, confirmando el numeral II de la parte resolutive de la resolución impugnada.-----

DISPOSICIONES LEGALES APLICADAS: Artículos citados y los siguientes: 2, 12, 28, 44, 46, 203, 204, 205 y 209 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 13, 141, 142, 171 y 143 de la Ley del Organismo Judicial; 4, 5, 6, 27, 28, 37, 38, 40, 41, 49, 51 y 54 del Decreto 41-99 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Carrera Judicial; 18, 19 inciso n) y 33 del Reglamento General del Decreto 41-99 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Carrera Judicial; 1, 2, 4, 6, 68 y 74 del Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Carrera Judicial. -----

POR TANTO:

Este Consejo con base en lo considerado y leyes invocadas al resolver DECLARA: I. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por LA SUPERVISION GENERAL DE TRIBUNALES, contra la resolución emitida por la Junta de Disciplina Judicial el seis de marzo de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar la denuncia promovida en contra de la abogada MARIA EUGENCIA MORALES ACEÑA DE SIERRA, en su calidad de Magistrada Vocal Décimo Segunda de la Corte Suprema de Justicia; y como consecuencia del anterior pronunciamiento, se CONFIRMA el numeral II de la resolución impugnada II.



20-2017
8 de 8

Consejo de la Carrera Judicial

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado JAIME AMILCAR GONZÁLEZ DÁVILA, contra la resolución emitida por la Junta de Disciplina Judicial el seis de marzo de dos mil diecisiete; y como consecuencia del anterior pronunciamiento, MODIFICA el numeral I de la resolución impugnada, el cual queda así: I. SIN LUGAR la denuncia promovida en contra del abogado JAIME AMILCAR GONZÁLEZ DÁVILA, en su función de Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, por las razones consideradas. III. Se REVOCAN los numerales IV y V de la resolución impugnada por las razones consideradas. IV. Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes a la Junta de Disciplina Judicial.

MAGISTRADO NERY OSVALDO MEDINA MENDEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE LA CARRERA JUDICIAL

Licda. Lillian Carlota Iten G.
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS a.i.
ANTE EL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL

Lic. Carlos Antonio Aguilar Revoloros
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA
ASAMBLEA DE MAGISTRADOS ANTE
EL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL

Licda. Dora Lizett Nájera Flores
REPRESENTANTE TITULAR DE LA
UNIDAD DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL

Licenciada Claudia Elvira González
REPRESENTANTE TITULAR DE LA
ASAMBLEA DE JUECES

Lic. Osvaldo Alejandro Aguilar Calderón
Secretario Ejecutivo del Consejo de la Carrera Judicial a.i.

